

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRIA EN DERECHO CON MENCIÓN

CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD



TESIS

**La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inalienabilidad de
las tierras comunales**

**Para optar el Grado Académico de: Maestra en Derecho con mención
en Derecho Constitucional y Gobernabilidad**

Investigador:

Abogada. Apolo Gómez, Luz Esmérita

Asesor:

Dr. Hernández Rengifo Freddy Widmar.

Lambayeque, 19 de mayo de 2023

**“La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inalienabilidad de las
tierras comunales”**



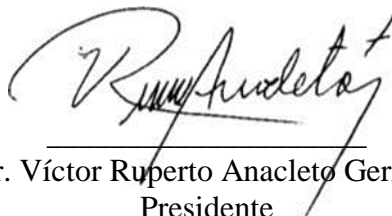
Abogada.
Luz Esmerita Apolo Gómez
Autor



Doctor.
Hernández Rengifo Freddy
Widmar
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo para optar el grado académico de: Maestra en Derecho con mención en Derecho
Constitucional y Gobernabilidad

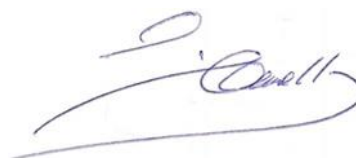
Aprobado por:



Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero
Presidente



Dr. Leopoldo Yzquierdo Hernandez
Secretario



Dr. Carlos Manuel Antenor
Cevallos De Barrenechea
Vocal

Lambayeque, 2023.

Constancia de originalidad de aprobación de tesis

Yo, Freddy Widmar Hernández Rengifo, Asesor de Tesis, revisor del trabajo de investigación de la Tesista Luz Esmérita Apolo Gómez, Titulada “La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inalienabilidad de las tierras comunales”, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18 % verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte de acuerdo a la Directiva para la evaluación de originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Guías de uso del Software de reporte de similitud TURNITIN, aprobado mediante Resolución N° 659-2020-R, de fecha 8 de setiembre de 2020, razón por la cual la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, Agosto del 2022.



Freddy Widmar Hernández Rengifo
Asesor

Dedicatoria:

A Baltazara, mi madre por su incondicional e invaluable apoyo, en el proceso de lograr este objetivo, que por diversas razones había aplazado, Muchas Gracias.

Agradecimiento

A Dios nuestro creador, por permitirme lograr este objetivo.



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Luz Esmerita Apolo Gomez
Título del ejercicio: Tesis Posgrado
Título de la entrega: La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inaliena...
Nombre del archivo: Tesis_Final_-_Luz_Apolo_Gomez.docx
Tamaño del archivo: 1.15M
Total páginas: 118
Total de palabras: 24,036
Total de caracteres: 128,710
Fecha de entrega: 23-ago.-2022 08:43p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 1886188350

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO
CON MENCIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD



TESIS

"La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inalienabilidad de
sus tierras comunales"

Investigador:
Amparo, Apolo Gomez, Luz Esmerita

Asesor:
Dr. Herminio Rengifo Freddy Wilson

Lima, agosto 2022

Dr. Freddy Wismor
Hernandez Rengifo
Asesor

D.N.I N° 174150122

Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.

La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inalienabilidad de las tierras comunales

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

9%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

14%

★ hdl.handle.net

Fuente de Internet


Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 15 words


Excluir bibliografía

Activo



Dr. Freddy Widmore Hermandez Rengifo
Asesor

D.N.I N° 17 45 01 22

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M.Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las 10.00 a.m. del viernes 19 de mayo de 2023, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°1266 – 2019 de fecha 25 de setiembre de 2019, conformado por:

Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO	Presidente
Mg. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ	Secretario
Mg. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA	Vocal
Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO	Asesor


Para evaluar el informe de tesis de la tesista LUZ ESMERITA APOLO GOMEZ, candidata a optar el grado de MAESTRA EN DERECHO CON MENCION EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD, con la tesis titulada “LA PROPIEDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LA INALIENABILIDAD DE LAS TIERRAS COMUNALES”.

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°437- 2023-EPG de fecha 08 de mayo de 2023, que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó a la candidata a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición de la candidata, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas a la candidata.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por la candidata, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con **15 puntos**, equivalente a

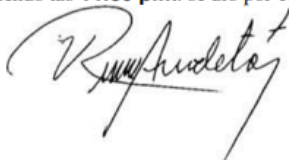
Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M.Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 2 de 3	

REGULAR, quedando la candidata apta para optar el Grado de MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

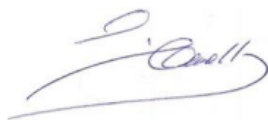
Siendo las **11.50 p.m.** se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
PRESIDENTE



Mg. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ
SECRETARIO



Mg. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
VOCAL

Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
ASESOR

Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

Índice

Constancia de originalidad de aprobación de tesis **Error! Bookmark not defined.**

Agradecimiento	v
Índice	vi
Índice tablas	xiv
Índice de ilustraciones	xv
Resumen.....	xvi
Abstract.....	xvii
Introducción	18
Capítulo I	22
Diseño Metodológico	22
1.- Realidad Problemática:	22
1.1.- Planteamiento del problema.	22
2.- Formulación del problema.	23
3.- Objetivos.....	23
3.1.- Objetivo General.....	23
3.2.- Objetivos Específicos.....	23
4.- Hipótesis	24
5.- Variables:	24
5.1.- Variable independiente.	24

5.2.- Variable dependiente.	24
6.- Tipo de Investigación.	24
7.- Antecedentes de la Investigación.	24
CAPITULO II	28
Marco Teórico	28
Sub Capítulo I	28
La propiedad	28
1. La teoría general de la propiedad	28
2. El concepto de propiedad colectiva	30
2. 1.- La propiedad territorial como elemento constitutivo de la Comunidad campesina	33
2. 3.- La titularidad de las comunidades campesinas en torno a la descentralización.....	35
3. La gestión estatal de los conflictos sociales 1920-2015	41
3.1. Los antecedentes a la gestión de conflictos sociales: 1920-1987	41
4. Conflictos sociales por la Ley de Deslinde y Titulación	45
5. La gestión actual de los conflictos sociales.....	48
Sub Capítulo III.....	56
El carácter inalienable de la propiedad en las tierras comunales	56
6. La inalienabilidad de las tierras comunales y su ausencia en el artículo 89 de la Constitución.....	56
7. La inalienabilidad	56

7.1. El tratamiento normativo de la propiedad territorial.....	57
Sub Capítulo IV.....	61
La Comunidad Campesina.....	61
8. Concepto de comunidad campesina.....	61
9. Los derechos comunales	62
10. Las tierras de las comunidades en el Código Civil y el Derecho de Propiedad sobre las mismas según la Constitución	63
11. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades nativas y campesinas	65
Capítulo III.....	68
Análisis de datos.....	68
1.- Tipo de Investigación.	68
2.- Método de investigación.....	68
3.- Diseño de contrastación	69
4.- Población y muestra	69
5.- Técnicas de recolección de datos	70
6.- Procesamiento y análisis e interpretación de datos	70
7.- Resultados.	71
7.1. Del resultado estadístico.....	71
7.2.- Resultados de la validación de expertos	73
Capítulo IV.....	91
Discusión	91

5.1. Discusión sobre el objetivo “Describir doctrinariamente el tratamiento del derecho a la propiedad respecto de las comunidades campesinas”	91
5.2. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el concepto de inalienabilidad de las tierras comunales y su ausencia en el artículo 89 de la Constitución”	97
5.3. Discusión sobre el objetivo: “Verificar la realidad de la defensa de la propiedad comunal en la Comunidades Campesinas”	100
5.4. Validación de las variables	102
5.4.1. Respecto a la variable independiente: “La supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales”	102
5.4.2. Respecto a la variable dependiente: “La propiedad en las comunidades campesinas”	103
Conclusiones	105
Recomendaciones	108
Referencias bibliográficas	109
Anexos	113
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos....	113
2. Respuesta a la información solicitada a SUNARP Oficina II Chiclayo.	118

Índice tablas

Tabla 1: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”..... 74

Tabla 2: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”..... 77

Tabla 3: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”..... 79

Tabla 4: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”..... 82

Tabla 5: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”..... 85

Tabla 6: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”..... 88

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”..... 74

Ilustración 2: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”..... 78

Ilustración 3: 2Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”..... 80

Ilustración 4: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”..... 83

Ilustración 5: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”..... 86

Ilustración 6: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”..... 89

Resumen

Esta tesis se ocupa de observar el aspecto garantista que opera sobre la propiedad que le corresponde a las comunidades campesinas como institución, a fin de reconocer su eficacia en función a la estructura constitucional que orienta dicha protección; siendo así, el desarrollo del análisis se basa en un cuestionamiento inicial que se enfoca en saber cómo, la supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales, genera un efecto de vulneración sobre la propiedad de las tierras en las comunidades campesinas.

Para lograr el fin académico se encamina esta tesis hacia el análisis de la realidad respecto a la manera en que se han generado libertades legislativas que permiten de alguna manera la fuga del patrimonio esencial de las comunidades campesinas sin el cual se pierde su naturaleza jurídica, aspecto que se reconoce como un efecto de la ausencia del concepto de inalienabilidad en el ordenamiento constitucional.

Siendo así, la proyección de esta investigación, se inclina hacia la sugerencia de que el ordenamiento constitucional debe ser restituido en lo que corresponde al artículo 89 a fin de restaurar la garantía de la propiedad comunal, asegurando su permanencia en el tiempo en función al elemento patrimonial que la sostiene.

Palabras claves: Propiedad, Comunidades Campesinas, Inalienabilidad, Tierras comunales.

Abstract

This thesis deals with observing the guaranteeing aspect that operates on the property that corresponds to the peasant communities as an institution, in order to recognize its effectiveness based on the constitutional structure that guides said protection; Thus, the development of the analysis is based on an initial questioning that focuses on knowing how, the constitutional suppression of the inalienability of communal lands, generates an effect of violation on the property of the lands in the peasant communities.

To achieve the academic purpose, this thesis is directed towards the analysis of reality regarding the way in which legislative freedoms have been generated that allow in some way the escape of the essential heritage of the peasant communities without which its legal nature is lost, aspect which is recognized as an effect of the absence of the concept of inalienability in the constitutional order.

Thus, the projection of this research leans towards the suggestion that the constitutional order should be restored in what corresponds to article 89 in order to restore the guarantee of communal property, ensuring its permanence over time based on the element patrimonial that sustains it.

Keywords: Property, Peasant Communities, Inalienability, Communal lands.

Introducción

El sentido que orienta a la investigación que ahora se presenta, se centra en verificar aspectos trascendentales relacionados con la protección normativa, tales como la protección desde la visión constitucional de las comunidades campesinas y la verificación de la vulneración que genera la ausencia del contenido constitucional de la inalienabilidad de la propiedad comunal, de las Comunidades Campesinas. Para lo cual resulta pertinente valorar aspectos de carácter social, doctrinario, legislativo, que destacan la importancia de esta investigación.

Pues siempre el Derecho, tiene efectos en el aspecto social y siendo así se ha podido corroborar que existe la necesidad de que las comunidades campesinas, deban realizar pleno ejercicio de su derecho a la propiedad; lo que implica la defensa de su territorio, el patrimonio relacionado con la cultura, las concepciones espirituales y el hecho de hacer que se mantenga vigente en el tiempo. Por lo que se les debe brindar seguridad jurídica, mediante la protección a su propiedad; el mismo que representa mucho más que un mero bien material; sino que trasciende al aspecto inmaterial.

En este sentido, observar que la doctrina ha asumido una posición, sobre este tema, es decir sobre la propiedad comunal y su defensa, la misma que ha permitido establecer, conceptos y posiciones sobre este tema. En cuanto al marco normativo, cabe señalar que la Constitución Política del Perú en su artículo 89°, de manera escueta hace referencia a que las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y que son personas jurídicas autónomas en el uso y la libre disposición de sus tierras y establece que la propiedad de su territorio es imprescriptible; evidenciándose que no existe como norma o principio

constitucional el carácter de la inalienabilidad de la propiedad de las comunidades campesinas; situación que las coloca en una situación de vulnerabilidad.

Situación que es opuesta a la posición de la Constitución de 1979, donde sí se contemplaba la inalienabilidad de las tierras de las comunidades campesinas; por lo que se asume que esta ausencia constitucional, está generando perjuicios estructurales y en la esencia de la organización de las comunidades, lo que va a generar una vulneración a la defensa de la propiedad de los comuneros, generando además una reducción del territorio que les ha correspondido por generaciones.

Por lo que en la presente investigación, se toma la posición académica sobre este aspecto de la norma constitucional, con la finalidad de realizar una propuesta, que brinde una garantía de seguridad jurídica, para la protección del derecho a la propiedad y su defensa en las Comunidades Campesinas.

Considerando por estos argumentos, que el desarrollo de esta investigación está revestida de una particular importancia, toda vez que el eje temático se desarrolla en función a la tan delicada defensa de la propiedad comunal. Pues, existe un riesgo latente de pérdida de la esencia de las comunidades campesinas, de su naturaleza institucional, de su arraigo a la tierra, de sus costumbres y todo lo que incorpora el conjunto conocido como comunidad jurídica.

Siendo pues de vital importancia entonces, verificar que tan perjudicial resulta la ausencia constitucional del carácter de inalienabilidad de las tierras comunales.

Teniendo en cuenta la descripción anterior, se ha desarrollado de manera sintética lo que se comprende como el cuestionamiento más importante que impulsa la investigación, esto es en relación a cuestionar si la supresión constitucional de la

inalienabilidad de las tierras comunales, genera un efecto de vulneración sobre la propiedad de las tierras en las comunidades campesinas

La interrogante que sintetiza el problema de la investigación, de acuerdo a la percepción inicial del tema, ha sido contestado de manera puntual, lo cual se muestra hipotéticamente bajo la siguiente indicación: “Si, se restaura la inalienabilidad de las tierras comunales; entonces se protege la propiedad de las comunidades”.

Conforme se explica, la investigación adopta un sentido lógico en base a la estructura de dos ejes temáticos, como son, el primero orientado a la inalienabilidad del territorio que pertenece a las comunidades campesinas, cuya ausencia en el ordenamiento constitucional se identifica como el origen o causa del problema; lo cual se vincula con el segundo eje que corresponde a la protección de la propiedad como derecho de las comunidades campesinas, relación que se reconoce como el sentido causal, en tanto que se advierte un efecto negativo sobre la garantía de este derecho.

Luego se desarrolla una definición de la propiedad comunal, para lo cual, se realiza un estudio de los antecedentes desde de Roma a la actualidad con nuestro actual Código Civil sobre esta institución. Destacándose que la propiedad comunal debe prevalecer sobre el carácter de los derechos individuales; reconociéndose así que la dimensión colectiva de la propiedad comunal coexiste sobre la dimensión individual de los derechos de propiedad individual de los miembros que conforman una comunidad.

Asimismo, se trata de comprender que, sobre la Teoría de la Propiedad, cabe destacar su finalidad y sus efectos; más allá de su definición; en atención al interés que genera la propiedad en el grupo familiar. Desarrollándose también el

proceso de titulación de las tierras comunales, que se inicia en atención al proceso de descentralización y los conflictos sociales que se generan por el enfoque financiero que nace en torno a la propiedad comunal.

Seguidamente teniendo ya una definición del derecho de propiedad comunal, respecto a la dimensión del derecho de propiedad como un elemento esencial del desarrollo social y personal; en este capítulo se evalúa la importancia de la protección; que debe recibir de parte del Estado esta institución jurídica. En este orden se desarrolla el reconocimiento que se les brinda a las comunidades campesinas desde el orden constitucional; donde inicialmente se les otorgo la característica de inalienable. Considerándose que mediante esta característica se protege en la propiedad la finalidad de lograr el bien común, como una garantía institucional.

Finalmente, se desarrolló la contrastación de la hipótesis que estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos específicos para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada una de las variables que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron crear la hipótesis conclusiva que se contrastó con la inicial; siendo así se construyeron las Conclusiones y Recomendaciones que en esta ocasión se presentan al criterio evaluador del jurado de la tesis.

La Autora.

Capítulo I

Diseño Metodológico

1.- Realidad Problemática:

1.1.- Planteamiento del problema.

La estructura de un Estado Constitucional de Derecho, se basa en el pilar normativo que es la Constitución, en nuestro caso la Constitución Política del Perú del año 1993, que contempla en su artículo 89° la naturaleza jurídica de las comunidades campesinas.

Al establecer una comparación de este artículo con lo plasmado en la anterior constitución (1979) sobre las comunidades campesinas, es fácil verificar que existe la ausencia del carácter inalienable de las tierras comunales, no se ubica taxativamente esta especificación.

Nuestro trabajo de investigación se proyecta a la búsqueda o verificación de la afectación que podría recaer en la defensa de la propiedad de las tierras comunales de las Comunidades Campesinas, en razón de la ausencia del carácter inalienable de tales predios.

Surgen entonces nuestros primeros cuestionamientos, siendo el primero ¿Cuál es la razón por la que la Constitución de 1993 no contempla el carácter de inalienabilidad de las tierras comunales?; el segundo de nuestros cuestionamientos sería ¿Qué efecto produce la ausencia de la característica de inalienabilidad de las tierras comunales, en la defensa de la propiedad?; en tercer lugar nos podemos cuestionar ¿Qué tan necesaria se hace la característica de inalienabilidad de las tierras comunales en el artículo 89° de la Constitución, para que se ejerza la defensa de la propiedad dentro de las comunidades campesinas?; finalmente debemos

preguntarnos ¿Cómo afecta la ausencia de inalienabilidad en el artículo 89 de la Constitución, para ejercer la defensa de la propiedades comunales?

A este nivel podemos ya realizar una interrogante integrada que conjugue los cuestionamientos antes plasmados y sirvan de eje temático para el desarrollo de nuestra labor académica.

2.- Formulación del problema.

¿Cómo se ve afectada la protección de las propiedades en las Comunidades Campesinas, ante la supresión del carácter inalienable de tierras comunales en la Constitución?

3.- Objetivos.

3.1.- Objetivo General.

Determinar si la protección de la propiedad en las Comunidades Campesinas, se ven afectadas por la ausencia del carácter de inalienabilidad de tierras comunales en la Constitución.

3.2.- Objetivos Específicos.

- Describir doctrinariamente el tratamiento del derecho a la propiedad respecto de las comunidades campesinas.
- Describir los conflictos sociales generados ante las políticas de titulación de tierras de las comunidades campesinas.
- Estudiar el concepto de inalienabilidad de las tierras comunales y su ausencia en el artículo 89 de la Constitución.
- Observar a las comunidades campesinas y el tratamiento de su propiedad en la Zona Registral II Chiclayo.
- Analizar la opinión de los operadores jurídicos sobre la reincorporación del concepto de inalienabilidad para asegurar la defensa de la propiedad comunal en la Comunidades Campesinas.

4.- Hipótesis

Si, se restaura la inalienabilidad de las tierras comunales; entonces se protege la propiedad de las comunidades.

5.- Variables:

5.1.- Variable independiente.

La propiedad en las comunidades campesinas.

5.2.- Variable dependiente.

La supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales.

6.- Tipo de Investigación.

De acuerdo a los tipos consignados por la metodología de la investigación y en función a que se trata de una investigación jurídica, es importante seguir el sendero de las investigaciones no experimentales, puesto que se hará uso del razonamiento jurídico para alcanzar un entendimiento de la realidad social y jurídica para conocer con exactitud los efectos del problema que se plantea, esto realizará una observación de los hechos para luego establecer inferencias que conlleven a un razonamiento general; siendo así sólo se analizará una circunstancia existente mas no se manipulará la realidad mediante experimentos que la alteren.

De otra parte, conforme a los tipos de investigación según el enfoque, esta se ha consignado como una de tipo cualitativa, toda vez que se remite el análisis a la verificación de las condiciones que se contemplan en la regla constitucional respecto al reconocimiento de las comunidades campesinas y los efectos que tiene sobre la garantía del derecho de propiedad de estas como entes institucionales.

7.- Antecedentes de la Investigación.

Es preciso aclarar que la propiedad en lo que se refiere a las Comunidades Campesinas tiene un carácter general por así decirlo y sin el ánimo a llegar a la redundancia, resulta ser comunal, se indica esto en razón de la posible confusión que se pueda tener respecto al conocimiento de que los comuneros no ostentan la

propiedad de sus parcelas, puesto que sólo acceden a la posesión y esta se traslada a través de la herencia.

La descripción desarrollada de la condición de los comuneros respecto de las tierras de la comunidad no es el tema central de la investigación, lo que interesa a esta tesis es la verificación de aquella propiedad en sí que corresponde a toda la comunidad, puesto que se constituye como un elemento principal de la propia existencia de dicha institución.

En ese sentido el primer paso para alcanzar el entendimiento correcto del sentido de la investigación es recoger las investigaciones que se han desarrollado con anterioridad sobre temas relacionados con el de esta tesis, así se podrá percibir el estado del arte que corresponde al asunto de la propiedad en las comunidades campesinas y que en esta ocasión se complementa con el punto de antecedentes de la investigación.

En el contexto de la investigación que se desarrolla conviene revisar los resultados de aquellos otros trabajos que se han ocupado de observar esta problemática, vista desde la perspectiva del derecho constitucional que se ocupa tanto de la garantía proteccionista de las Comunidades Campesinas, así como de la propiedad en forma general, por lo mismo que se ha optado por tener en primera línea de consideración la tesis de Ortega Vásquez (2014), quien bajo el título *El derecho de propiedad comunal indígena en la Amazonía y su regulación en la legislación peruana*, de la misma que por tratar del derecho de propiedad comunal, se consideró prudente recoger la siguiente conclusión:

“En el caso estudiado podemos apreciar la existencia de un sistema colectivo de manejo del territorio que trasciende los linderos de las comunidades nativas reconocidas como personas jurídicas independientes aunque pertenecientes al

mismo grupo étnico, el Asháninka”. (p. 96); lo cual permite apreciar que el examen de la realidad que ejecuta este autor está basado en la existencia de los sistemas que se organizan como una colectividad y tiene como vínculo inicial a la territorialidad, este es el espacio donde desarrollan sus actividades.

Además de ello se aprecia que, la forma en que se ejecuta este tipo de colectividad orienta su atención sólo en la cuestión común de la propiedad, así pues, señala el autor que: “Este sistema colectivo se sostiene en la propiedad comunal que prevalece sobre los derechos individuales de propiedad de los miembros de la comunidad nativa. De esta manera podemos reconocer la dimensión colectiva de la propiedad comunal que coexiste sobre la dimensión individual de los derechos de propiedad individual de los miembros que conforman la comunidad”. (Ortega, 2014, p. 96)

Esta diferenciación es importante para mantener el equilibrio de la estructura que se crea conjuntamente a la colectividad, la identidad de este tipo de organizaciones adquiere tal importancia en función a la manera en que se propicie la prevalencia o se ejecute el control del poder sobre la propiedad de carácter general sobre los intereses individuales de aquellos que forman parte de la organización, esto es los comuneros, fundamento que se traslada a la realidad general comunal.

De ello, en función al equilibrio que propende esta afirmación, se puede indicar que adquiere la condición de interés social el hecho de que se proteja la propiedad de estas organizaciones, así pues, “La propiedad comunal ha sido una institución que ha sido inteligentemente aprovechada por los pueblos indígenas para mantener su vigencia en condiciones bastante hostiles y poco favorables; en este sentido podemos afirmar que la propiedad comunal cumple una función social importante,

en tanto que va a permitir la continuidad cultural de los pueblos indígenas y la conservación de los bosques amazónicos”. (pág. 96)

Se comprende importante el aporte como base o punto de partida para el desarrollo temático, toda vez que genera un alcance orientado a la protección de la propiedad comunal, lo que constituye la dirección de nuestra proyección. Esto significa entonces, que, así como se busca proteger el derecho de propiedad comunal mediante la legislación nacional, es importante tal medida nazca de la misma norma, esto es la Constitución Política del Perú, que debiera recoger a nuestro a priori entender, el carácter proteccionista que configuraba la anterior Carta Magna, especificando el carácter de inalienable de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas.

CAPITULO II

Marco Teórico

Sub Capítulo I

La propiedad

1. La teoría general de la propiedad

La comprensión de la teoría de la propiedad implica no sólo la concepción de su definición, es importante reconocer la finalidad y los efectos que surte en la relación humana, esto es su naturaleza jurídica; por lo mismo que resulta necesario iniciar esta descripción teórica partiendo del concepto mismo del término propiedad, comprendido inicialmente bajo la idea de señorío, en interés del grupo familiar, indiferenciado, nucleado en cabeza del Pater Familiae al que estaban sujetos personas (alieni iuris, libres o esclavos) y cosas.

Esta concepción está relacionada entonces con el sustento de un grupo, compuesto por personas y los bienes que permitían al jefe del grupo poder mantenerlo, un vínculo que se reconoce originado en la necesidad de cada sujeto, en primer orden de cada uno de los integrantes del grupo para poder supervivir y luego en el orden de quien se comporta como el responsable de la administración de los mismos, desde luego esta vinculación con el tiempo llegaría a convertirse en el símbolo de poder que sería el origen de grandes disputas incluso.

Es entonces, desde las XII Tablas, que se comenzó a distinguir el poder del Pater sobre las personas libres, mujer in manu e hijos de familia por una parte y otra propiedad autónoma sobre esclavos y cosas. Fue esta última la que se consideró Propiedad en tiempos históricos.

Este poder del que se habla pudo ser considerado incluso como la capacidad de decidir sobre el destino de las gentes, base del esclavismo y la servidumbre, la

potestad del jefe de familia de poder asumir las decisiones sobre lo que pasaría sobre cada uno de los miembros de su grupo, quizá la propiedad a este nivel podría incluso relacionarse con el sentido patriarcal o lo que más adelante representaría el machismo como el poder del jefe sobre el resto de la familia.

La propiedad para los romanos indicaba la facultad que corresponde a una persona, llamada propietario, de obtener directamente de una cosa determinada toda la utilidad jurídica que esta cosa es susceptible de proporcionar.

No se tiene conocimiento de que Roma en sus comienzos tuviera un verdadero concepto de propiedad y se ha llegado a este concepto resumiendo la filosofía jurídica del pueblo romano, sus juristas y sus legisladores.

Ulpiano da una idea de propiedad al definir al "Pater familiae" diciendo: "Qui in domo dominium habeat quamvis filios habeat". Dominio es propiedad ejercida sobre una cosa determinada. Justiniano consideró la necesidad de una definición y en las Institutas hizo una calificación muy imprecisa: "Dominium est plena in re potestas".

El Código Civil define la Propiedad, por su contenido jurídico, como "El poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe; ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley" (Art. 923 del Código Civil).

La propiedad es el derecho civil patrimonial más importante y en el cual reviste una serie de garantías de su protección y su transferencia, en segundo punto será la materia de análisis del presente trabajo, en primer lugar la propiedad es un poder jurídico pleno sobre un bien el cual contiene cuatro atributos clásicos tradicionales o derechos que confiere la propiedad a su titular: usar, disfrutar disponer y reivindicar.

Del plano internacional se puede rescatar la idea de que la propiedad privada es aquella donde una legislación local otorga facultades sobre bienes materiales o inmateriales. “Gozando la propiedad privada de su protección como derecho humano”. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948)

Es preciso indicar que la propiedad parte originariamente del Estado, siendo éste el que deriva esta potestad mediante el sentido de protección por su inherencia a la condición humana, por lo cual se convierte en un derecho que pese a ello no tiene un carácter absoluto, en tanto que se han derivado limitaciones a su propio ejercicio; tal es el caso del carácter inalienable de las tierras comunales que no permiten la intromisión de terceros sobre dicho espacio territorial.

Además, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana decir que: La tutela judicial efectiva es un elemento importantísimo en la garantía de los Derechos Humanos. En el caso de la Propiedad Privada, las afectaciones pecuniarias y de los bienes que pudieran derivarse de un proceso indebido constituyen violaciones del mismo. La Corte ha establecido que serán consideradas ilegales las consecuencias de un procedimiento que fue celebrado en contravención a las leyes. (Corte Interamericana, Caso Ivcher Brosnstein, 2001)

2. El concepto de propiedad colectiva

Es preciso establecer el concepto que señala la doctrina para este tipo especial de la propiedad, puesto que justamente es uno de los ejes sobre los cuales se desarrollará el estudio de nuestra investigación.

Así tenemos como ejemplo la definición tomada del profesor Grossi (1992), quien señalaba:

“Hay todo un conjunto de realidades, sepultadas, vivísima en el campo y en las montañas medievales y que logran, a pesar de hostilidades, condenas y

deformaciones arrastrarse intactas hasta nosotros, formas primordiales de organización comunitaria de una tierra, en las cuales no solamente falta el espíritu individualista, sino incluso el mismo espíritu propietario. Intentamos referirnos al fenómeno que podemos aproximativamente y genéricamente, con una buena dosis de arbitrariedad, calificar como propiedad colectiva”. (pp. 26-27)

Continúa el profesor Grossi aclarando que:

Ahora bien, esta así llamada propiedad colectiva, en todas sus formas tiene una plataforma común; y es la de ser garantía de supervivencia para los miembros de una comunidad plurifamiliar, la de tener un valor y una función esencialmente alimentario, donde el contenido fundamental es el goce condicionado del bien con un indiscutido primado de lo objetivo sobre lo subjetivo: primado del orden fenoménico, que se respeta a toda costa sobre el individuo; en el orden comunitario en relación con el individuo. (Grossi, 1992, pág. 28).

En el ámbito nacional es posible recoger el análisis realizado por la Mag. Ortega (2014), respecto de la legislación que contempla la propiedad comunal, donde indica: “Analizando el texto de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva – Decreto Ley 22175, encontramos que esta utiliza criterios y conceptos más afines a los expresados por el Convenio 169 de la OIT; es decir reconoce como titularidad el territorio de las comunidades nativas”. Esto implica el reconocimiento de la propiedad de este tipo de organizaciones, pero debe asumirse que este concepto aplica bajo ciertas restricciones que se entienden como límites para la ejecución de este carácter de titularidad, precisamente orientado por las características particulares de la organización.

“Nótese que, hasta la Constitución de 1933, bajo la cual se expidiera el Decreto Ley 22175, se utiliza el termino de propiedad de las comunidades

(subrayado nuestro), siendo que con la Constitución de 1979 se introduce la definición de propiedad privada de la tierra (subrayado nuestro) en el artículo 157. Consideramos que con esta modificación se confunde el concepto de propiedad limitándose su alcance a la dimensión meramente privada, dejando de lado su dimensión colectiva”. (Ortega Vasquez, 2014)

En el estudio sobre comunidades indígenas por la investigadora Mello Alvarenga (2018); encontramos la definición plasmada por Paola Porru, quien indica:

“El derecho de la propiedad de la tierra, el que en síntesis llamare propiedad indígena, tiene una función específica de la cual resulta su configuración especial. [...] El concepto de la propiedad privada de la tierra no existe en la cultura indígena. En esta cultura la tierra es un bien que pertenece a la colectividad y que tiene un valor particular. Afirman en efecto los antropólogos [...] que para los indios la tierra es mucho más que un simple medio de producción y sustento pues representa la base de la vida social de ellos, estando íntimamente ligada a su sistema de conocimiento y tradiciones”. (Mello Alvarenga, 2018, págs. 113-137)

Como se puede apreciar, el sentido de la propiedad que se desprende de su teoría general se reconoce bajo la particularidad de protección de la realidad indígena, por lo cual se puede apreciar su funcionalidad desde luego adecuada a las condiciones particulares de este tipo de organización, así pues, el concepto es de carácter social, toda vez que la percepción de esta pertenencia corresponde a todo el grupo nunca de manera individual para cada sujeto. Se nota también de la construcción citada que existe una relación subjetiva y hasta ideal en lo que corresponde a la propiedad, puesto que va más allá del límite de la producción que se obtiene de la tierra, ello se puede comprender como la cosmovisión que tiene el miembro de una comunidad basándose en su tradicional forma de actuar y desarrollarse en la vida.

2. 1.- La propiedad territorial como elemento constitutivo de la Comunidad campesina

Con el fin de alcanzar una comprensión más adecuada, es preciso plasmar el concepto de comunidad campesina, ello visto de las apreciaciones doctrinarias, para lo cual se toma lo señalado por Peña (1998), donde señala que se concibe como:

(...) un grupo social integrado por campesinos andinos, identificados económica, social, cultural e históricamente dentro de un espacio territorial y que, más allá de una relación individual-familiar que destaca en sus actividades, desarrollan una interacción colectiva para provecho de todos los miembros. (Peña Jumpa, 1998, pág. 66)

Esta indicación, permite entender que no sólo se trata de un grupo de personas que deciden proteger su propiedad y explotarla con el fin de vivir de ella, es una perspectiva más amplia pese a su condición costumbrista y distinta de la sistematización jurídica que se experimenta en la sociedad común. Todo ello debe estar contenido en un esquema normativo, con el fin de otorgar protección, por lo cual se ubican las garantías para estas comunidades campesinas, en el esquema normativo constitucional.

Nuestra Constitución Política, desarrolla lo relacionado las Comunidades Campesinas en solo dos artículos, los cuales además de manera muy escueta, sostienen que el Estado Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, ya sea en forma privada o comunal.

Artículo 88°.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal, o en cualquier forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono prevista en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades campesinas y nativas. (Robles Mendoza, 2002, págs. 167-168)

2. 2.- Protección Legislativa de la Comunidad Campesina

Ahora como norma de desarrollo, de esta institución de las Comunidades Campesinas, tenemos a la Ley General de Comunidades Campesinas - Ley N° 24656, la misma que fue dada el treinta de marzo de 1987.

Es así que esta norma, establece que las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. (Ley General de Comunidades Campesinas, 1992, pág. 3)

Asimismo Nuestro Código Civil, nos ofrece de igual forma muy escasas disposiciones sobre el régimen de las comunidades; destacando esta norma que el principal patrimonio de las comunidades campesinas es el territorio sobre el cual se asientan.

Estableciendo en su Artículo 134°, una definición de la comunidad campesina:

“Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Están reguladas por legislación especial”

Que sin embargo cabe resaltar que este código civil, nos hace una remisión a una norma especial, es decir nos remite a la Ley General de Comunidades Campesinas.

En su Artículo 136° el Código Civil, nos ofrece una definición del carácter que tiene las tierras de las comunidades campesinas:

“Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú. Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad”.

Destacándose de este artículo, que sí reconoce como característica de la propiedad comunal el carácter de inalienable, más no lo reconoce la constitución política del Perú.

2. 3.- La titularidad de las comunidades campesinas en torno a la descentralización

La importancia del carácter descentralizador de las políticas públicas que se han desarrollado en el Perú, siempre han estado bajo el ojo crítico de la misma sociedad, puesto que sus resultados no siempre han sido los más esperados, pese a ello es rescatable el origen o la tendencia de regionalizar las acciones para que la atención

de los problemas sociales se ejecute de una manera más idónea, entre otras cosas para lograr el bienestar común de los ciudadanos, sobre todo con especial atención de aquellos sectores donde el efecto presupuestal no alcanza sus objetivos.

Dicho proceso, con el pasar de los periodos gubernamentales fue poniendo su visión en la capacidad que tienen las comunidades campesinas en función a su territorialidad, esto es la cantidad de espacio de tierras que se podrían aprovechar para lograr el impulso de las regiones atrayendo a la mayor cantidad de inversionistas. Es precisamente en ese marco de oportunidades que el proceso descentralizador se enfoca en promover la titulación de las tierras comunales, por lo mismo que se generó el marco legislativo para tal fin.

Ello estaba reflejado en la composición de la “Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgada en el 2003 se dispuso el inciso n del Artículo 51; que una de las funciones de los Gobiernos Regionales era la promoción, gestión y administración del proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, incluyendo las tierras de las comunidades”.

Este enfoque regulador, impulso la actividad de estas dependencias para los fines de la titulación de las tierras comunales, para lo cual la dirección de cada una de las regiones en cuanto al sector de agricultura tomo la competencia para el desarrollo de esta actividad; desde luego ello tomo cierto tiempo para que se pudiera iniciar con la ejecución de estos procesos.

Con el pasar del tiempo se fueron instalando de manera transitoria en cada una de las direcciones regionales de agricultura conjuntamente con la creación de los propios gobiernos en base a la “Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización promulgada el 17 de Julio del 2002, y la Ley 27683, Ley de Elecciones de los Gobiernos Regionales promulgada el 15 de marzo del 2002”.

Dicha regulación tomo fortaleza con el pasar del tiempo, tan es así que “en enero de 2003 se instalaron las primeras autoridades de los 25 Gobiernos Regionales, elegidas recién en el 2005. En este contexto, la titulación a cargo del PETT se encontraba estancada”. (LAOS, 2005).

Inicialmente se tuvo la idea de que esta acción que se destinó para la titulación en base a la descentralización debiera rendir los resultados idóneos, puesto que teniendo en cuenta que el plazo para lograr descentralizar el Perú se proyectó para finales del año 2008, de acuerdo al “Decreto Supremo 074-2007-PCM, ampliado hasta el 30 de Junio del 2009 mediante el Decreto Supremo 088-2008-PCM”. De manera posterior de acuerdo a D.L.1089 que se emitió durante el año 2008, se tuvo la indicación temporal dando plazos exactos para que se trasfiera de la potestad para titular al Gobierno Regional el mismo que sería extendido hasta 4 años más esto es al día veintisiete del mes de junio en el año 2012.

Es así como se estableció una regla plasmada como resolución del Ministerio de Agricultura bajo el número de “303-2009-AG”, mediante la cual se produjo la aprobación de la “matriz de delimitación de competencias y distribución de funciones del Ministerio de Agricultura” a través de la misma se ha logrado establecer de manera puntual la manera en que se distribuye la competencia en su relación con el gobierno regional.

“Las acciones mencionadas en pro de la titulación se enmarcaron en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (en adelante, TLC). El referido tratado pretendía incrementar los flujos de inversión privada, al otorgar certidumbre y seguridad jurídica al inversionista sobre las tierras en las que realizarían los proyectos, en su mayoría las tierras de las comunidades”. (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2004).

La perspectiva que se indica es sin duda alguna de tipo financiera, así pues se desarrolla en función a lo que corresponde a las condiciones de las propiedades de las comunidades campesinas, lo cual ha generado que los pobladores del sector indígena así como la organización de sus bases plantearan su postura de rechazo respecto a las reglas que se han señalado, toda vez que se ha considerado como contrario a lo que realmente representa su interés bajo la connotación colectiva.

De igual modo esta condición al incorporarse con la intención de implementar la inversión ha propiciado la creación de ciertas pautas legislativas que se promueven como facilitadoras del acceso a disponer de los espacios territoriales que por derecho consuetudinario les corresponde a estas poblaciones comuneras, estos son los Decretos Legislativos 1015, 1064 y 1073.

Esta consideración pues conllevó a que en las comunidades campesinas se motivara la idea de represión, puesto “que dichas normas afectaban el derecho de propiedad de sus tierras, por lo cual el 5 de junio del 2009, en Bagua, provincia del departamento de Amazonas, ocurrió un enfrentamiento entre indígenas (awajun y wampis) y la policía. Dicho enfrentamiento ocasionó la muerte de 23 policías, 9 indígenas, heridos y la intervención del relator de Pueblos Indígenas para Naciones Unidas. Ante ello el Congreso aprobó la Ley 29261 derogando los Decretos Supremos N° 1015 y N° 1073 y restableció la vigencia de los Artículos 10 y 11 de la Ley de Tierras”.

Es en virtud a ello que se logró dar inicio a las transferencias de aquella función que ejecutada la acción de titular a la comunidad a cargo de COFOPRI, para que se produjera en el gobierno regional. “Asimismo, en mayo del 2011 - antes del 27 de junio del 2012- plazo establecido en el Decreto Legislativo 1089 para la transferencia de la competencia de titulación– los gobiernos regionales de

Ayacucho y Huancavelica culminaron con la transferencia de funciones y fueron competentes para la titulación”.

Es así como se presenta en dicha época la circunstancia “respecto al ente rector encargado de emitir las políticas, lineamientos y demás dispositivos para llevar a cabo la referida titulación, hubo diferentes cambios que evidenciaron la falta de una política organizada y un criterio estable en torno a dicho procedimiento”.

(DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2012)

Además de todo lo señalado, la potestad de poder titular que se le otorgó al gobierno regional tendría que poder ejecutarse de manera sistemática con las funciones que le corresponden a la SUNARP, institución que de manera inicial poseía reglas complejas y bastante engorrosas que dificultaban esta acción tituladora de la comunidad campesina. En función a ello se produjeron cambios; puesto que “en mayo del 2013 cuando se aprobó la Directiva 05-2013-SUNARP/SN que reguló la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas. Esta norma consideró lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al referir que el Estado tiene el deber de adecuar su derecho interno, procedimientos constitucionales, medidas legislativas o de otro carácter a los estándares de la Convención para efectivizar el derecho al reconocimiento de la personería jurídica y a la autonomía organizativa”.

Luego de este tipo de acciones se puede apreciar en la secuencia que “en diciembre del 2013, que se aprobó la Directiva 10-2013-SUNARP-SN mediante la cual se reguló la inscripción de los actos y derechos de las comunidades campesinas. Dicha norma se creó para facilitar el ejercicio de los derechos de las referidas comunidades, ya que la lejanía de las mismas, las diferencias idiomáticas, culturales

y de recursos económicos no permitía acceder a los servicios de Registros Públicos”. (PACHECO, 2009)

Sub Capitulo II

Título

Los conflictos sociales generados ante las políticas de titulación de tierras comunales

3. La gestión estatal de los conflictos sociales 1920-2015

En lo que respecta a la verificación de las actividades estatales respecto a los conflictos que se desarrollaron entre 1920 y el 2015 desde una perspectiva social se ha considerado el análisis partiendo de las acciones previas que se han tomado como parte de la política pública estatal para solucionar este conflicto social entre 1920 y 1987; luego se ha tenido en consideración la participación de la “Ley de deslinde y titulación” para reconocer su ámbito de aplicación y efectos, al igual que se ha tenido en cuenta como punto de partida del cambio de la política pública para el tratamiento en la actualidad de los conflictos sociales.

3.1. Los antecedentes a la gestión de conflictos sociales: 1920-1987

Con el paso de ellos años este tipo de situaciones que representan la disconformidad de la sociedad sobre un aspecto de la realidad se ha generado de manera constante y forma parte de la historia de la nación. Así se han generado diferentes concepciones sobre este tipo de situaciones conflictivas a nivel social, así como también se han creado observaciones de la realidad partiendo de la visión estatal con la intención de propiciar la acción de trabajo a fin de mitigarlos o solucionarlos. Principalmente se ha tenido en consideración la presencia de gestiones públicas que se han enfocado en la participación del diálogo para el reconocimiento de las necesidades sociales presentes y originadoras del conflicto. Por todo ello interesa saber de qué manera la política estatal se ocupa de la presencia de acciones conflictivas y que acciones toma para solucionarlos y que tanto se ha logrado

aprender respecto a este tipo de control necesario para mantener el equilibrio en el grupo social.

Posteriormente en 1937, se creó la Dirección General de Asuntos Indígenas (en adelante, DGAI) del Ministerio de Trabajo y Fomento, la cual tuvo entre sus funciones organizar los tribunales que conocerían los conflictos que se susciten entre indígenas, de conformidad con la Ley 8120 y; resolver administrativamente las quejas y reclamos de los indígenas (ROBLES, 2002).

Para 1941 se creó la Procuraduría Gratuita del Indígena, adscrita a la DGAI y que fue transferida al Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Entre sus competencias tuvo la de prestar asistencia jurídica gratuita a las comunidades, patrocinar las quejas y reclamaciones ante las autoridades judiciales, estudiar los títulos de la propiedad comunal, producir opinión sobre su mérito legal e intervenir en la contratación de ingenieros y peritos para el levantamiento de planos.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo del 18 de julio de 1946, se determinó que el Estado intervendría para resolver los conflictos, si cesaban todos los actos de violencia.

Si bien esta medida pudo evitar que se generen actos de violencia, evidenció falencias en el accionar estatal: (I) la inexistencia de acciones preventivas para la gestión de dichos conflictos, (II) la ineficacia de los canales de comunicación entre comunidades de indígenas y Estado y, (III) ausencia de estrategia para abordar dichos conflictos una vez iniciados. Esta situación no es ajena a la actualidad, ya que la intervención estatal está enfocada en aplacar el conflicto sin una propuesta preventiva sólida y, luego de ello, iniciar el diálogo.

Esto fue “la antesala a la reforma agraria, la cual se origina entre otros aspectos por la concentración de tierras y desigualdad social (Informativo Legal

Agrario N° 21, 2010). La concentración de tierras estuvo a cargo de aproximadamente 280 familias representada por las haciendas con poder económico y político”. (MEJÍA, 1990)

Otra de las circunstancias problemáticas de la realidad agraria en esta época ha sido la condición violentista que se experimentaba a nivel nacional durante dicho periodo, puesto que el hecho de que existiera acumulación de tierras se consideró como un elemento que indicaba falta de igualdad de tipo social, puesto que producía un efecto directo sobre quienes poseían espacios territoriales de manera ancestral.

“Esto se reflejaba en la desatención del Estado con las comunidades - en su mayoría ubicadas en las haciendas o latifundios y en la condición del campesino que era adquirido junto con las tierras en dichas haciendas situación que coadyuvó a que las comunidades mantengan condiciones de vulnerabilidad”. (MARTÍNEZ & ARMANDO, 1982)

“Este contexto fue motivo para la generación de movimientos campesinos organizados, en la costa y sierra del país entre 1959 y 1963, con mayor incidencia en la sierra sur, debido a las alianzas obrero – campesinas gestadas en dichas zonas” (MARTÍNEZ & ARMANDO, 1982); (VALCÁRCEL, 1989).

Este tipo de acciones de cambios son los que dieron la pauta para liderar el acceso al territorio y tomarlo, lo cual se fortaleció conforme la acción del Estado no resultaba satisfactoria a los intereses de los poseedores quienes reclamaban sino que estos reclamos tenían respuestas que empeoraban su situación.

“Gestión de conflictos sociales suscitados por la tierra durante la reforma agraria: la vigencia del fuero agrario que fue creado en 1969 con la ley de la primera reforma agraria, debido a que el fuero común permitió la consolidación del latifundio y que los campesinos litigaran largos años encontrándose siempre con

el inconveniente de la solvencia económica, posición social o ausencia de asesoría legal”. (ESTRADA PÉREZ, 1974)

La actividad que se generó en función a la incorporación de fueros para la atención de este tipo de casos, estuvo a cargo de lo que se conocía como el juez de tierras así como el “Tribunal Agrario”, ente que tenía jurisdicción y era competente al punto de poder solucionar el conflicto o controversia que era derivada de la ejecución de las leyes que incluía los cambios en el agro respecto a los poseedores y tenedores de espacios territoriales de carácter rústico lo cual incluye a la comunidad campesina.

Se trataba de la existencia de un proceso específico respecto a las comunidades campesinas, “lo cual implicaba que los jueces de tierras practiquen una inspección ocular sobre la zona en disputa para que la sentencia final pueda ser inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble. Asimismo, en 1970 se emitieron distintos dispositivos legales a fin de que se incorporen defensores de oficio para las comunidades campesinas”. (RAMÍREZ MUÑOZ, 1974)

Así también se puede señalar que “el Decreto Ley 22747 emitido en noviembre de 1979 modificó el Artículo 123 de la ley de la segunda reforma agraria a fin de suprimir la conciliación en los procesos judiciales donde participaran las comunidades campesinas. Esto generó incertidumbre respecto a la imparcialidad del juez y retardó el proceso, estableciendo en su lugar la obligatoriedad de la inspección ocular y que la audiencia de pruebas se realice en el predio materia de litigio”. (FIGALLO G. , 2007)

Resulta interesante verificar este tipo de análisis temporal del avance de las acciones estatales: que se entendieron como un “modelo de organización de la

administración de justicia agraria en América Latina. Así, señaló que este modelo sirvió como herramienta para los derechos del campesinado en el contexto de la reforma agraria. Sin embargo, la valla burocrática judicial y la falta de justicia social de los jueces de tierras permitieron que las decisiones judiciales sean ajenas a la realidad de las comunidades y dilaten los procesos”. (FIGALLO G. , 2007)

Además de ello se produjeron diversos conflictos debido a “la lucha de tierras de comunidades campesinas, sea entre comunidades o con las nuevas organizaciones agrarias (SAIS y CAPs), organismos del Estado, la iglesia o particulares. Desde la vigencia del fuero agrario hasta 1975 se tuvieron 901 juicios seguidos por las comunidades; sin embargo, los conflictos entre comunidades solo representaron el 15% del total, mientras que el mayor número de casos fue entre comunidades con particulares con un 78%”. (SINAMOS, 1976)

“Al respecto, los juicios iniciados por las comunidades campesinas tuvieron como causas principales la ausencia de normas específicas para ejercer el régimen legal de la tenencia de las tierras comunales”. (SINAMOS, 1976)

Este tipo de situación se produjo también en “Huancavelica, en el cual el 4 de marzo de 1978, como resultado de asambleas y movilizaciones populares, se constituyó el Frente de Defensa de Huancavelica, cuyos reclamos contemplaron la paralización de los juicios de tierras en comunidades campesinas, en tanto eran éstas las que debían aplicar sus propios métodos de resolución de conflictos”. (ALENCASTRE & TORO, 1985)

4. Conflictos sociales por la Ley de Deslinde y Titulación

Es importante tener la perspectiva del ámbito de aplicación y los efectos que produjo esta regla en el Perú, así se tiene que “En el marco del Rimanacuy en 1986,

se crearon 17 grupos de trabajo para tratar diferentes temáticas como tecnología, créditos, legislación, tenencia de la tierra, entre otros planteados por los comuneros”. (TANTALEÁN, 1986)

Pese a las circunstancias que produjeron la gestión estatal no tuvo ninguna variación en relación con la forma en que se controlaban o trataban este tipo de conflictos de carácter social que se daba en función a la discusión respecto al lindero que le correspondía a las propiedades comunales.

Desde un inicio luego de la promulgación de esta ley se estableció que sean las “Direcciones Regionales de Agricultura” las que estuvieran la competencia necesaria para generar la titulación, así mismo se convertirían en primer nivel de instancias para la resolución de los conflictos que se generaran respecto a las tierras y sus linderos. Vale señalar, que los jueces de tierras perdieron esta potestad de ser primera instancia.

Se puede apreciar que en este periodo de tiempo de acción de las Direcciones regionales que se propiciaba la acción de conciliar sobre la solución del conflicto como primer elemento que se proyectara sobre los acuerdo a los que pudiera arribarse entre cada comunidad campesina con la otra en conflicto.

“Sin embargo, de no existir un acuerdo se derivaba a la vía judicial para que los Tribunales Agrarios resuelvan con celeridad. Pese a ello, esto podía perjudicar a las comunidades, ya que -en un breve lapso de tiempo- debían presentar distintos documentos para probar la posesión de la tierra”. (BURT, 2011)

Por lo expuesto, durante esta etapa no hubo una instancia especializada para solucionar conflictos suscitados ante la falta de titulación de comunidades, ni mucho menos espacios de conciliación ante la superposición de tierras o ante las

controversias intercomunales. Como se señaló anteriormente, desde 1992 el PETT estuvo encargado de conducir todo el proceso de titulación; sin embargo, entre sus competencias no estuvo la gestión de conflictos suscitados por titulación de comunidades.

Por otro lado, para (MONGYLARDI, Cinthia, 2015) el Estado en 1990 consideraba que el PETT no cumplía con titular e inscribir los derechos de propiedad en el Registro de Predios, lo cual generaba la nulidad del título y que sea posteriormente rebatido. Así, la desprotección de las comunidades ante un título de propiedad inválido o inexistente fue una constante en una población aún inmersa en los avatares de la violencia política ante incursiones armadas militares y senderistas. Esto último, tal como lo señala (BURT, 2011) hizo que los conflictos entre las comunidades no fuese evidenciado por las propias poblaciones; toda vez que aún a fines de los años noventa la conflictividad seguía siendo vinculada a acciones senderistas, pese a que tenían un fin evidentemente diferente. De esta manera, para Burt durante el gobierno de Fujimori cualquier oposición era considerada como un acto subversivo, lo cual impidió que la sociedad se organice de manera visible generando una sociedad civil “desmovilizada, contraída e incapaz de desafiar a un régimen autoritario”.

Se debe tomar la recopilación de (ARCE, 2010) quien señala que en esa época “se elaboró una Base de Protestas Sociales con datos recopilados por los diarios El Comercio, Expreso y La República desde 1985 hasta 2006, evidenciando las protestas durante cuatro gobiernos (García, Fujimori, Paniagua y Toledo)”.

Es posible advertir el planteamiento de que teniendo en cuenta: “la visibilidad-aumento de protestas sociales y la apertura del sistema político, el cual concluye que los ciclos con mayor número de protestas fueron al terminar 1980 y al empezar

los 2000. Precisamente en esos años se brindaron condiciones políticas más favorables para ejercer derechos civiles y políticos”.(Y & TANAKA, 2009)

“El Observatorio Regional de Conflictividad –emprendimiento conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación UNIR– indica que los conflictos comparten una plataforma común sobre la que se desarrollan (AÍN, 2014). Es así que desde la década de 1980 hasta el 2000 aproximadamente, la manera de gestionar la conflictividad social estuvo guiada por la represión, característica casi intrínseca de las dictaduras en América Latina”.

5. La gestión actual de los conflictos sociales

Durante los primeros años del siglo XXI se produjo la tan ansiada regionalización que implicó acciones para transferir potestades y la función que le corresponde al órgano centralizado de gobierno para la solución de los conflictos de tipo social. Esta circunstancia ha podido evidenciar con el paso del tiempo que en dicha época no se tenía una idea completa de lo que representaban este tipo de conflictos. En tal sentido los conflictos de tipo social que se referían a un origen territorial con respecto a la titulación de los espacios de las comunidades campesinas, lo cual estaría a cargo del gobierno regional de no ser así tendrían la opción de resolver jurisdiccionalmente el conflicto establecido.

“Durante el inicio de la década del 2000 las protestas de mayor importancia fueron las de carácter político, debido a las reformas estatales emprendidas en un proceso de modernización estatal y regionalización. En dicha época, la Defensoría del Pueblo era la única entidad estatal que reportaba los conflictos sociales desatados al interior del país –los cuales estaban relacionados a las elecciones regionales del 2005”. (GARAY & TANAKA, 2009)

En este escenario hace su aparición la potestad de la Defensoría del Pueblo, pues interviene respecto a su competencia dadas las circunstancias que se propiciaron durante el gobierno de Alejandro Toledo respecto a la protesta de este tipo social, lo cual se considera que se debió a la ausencia de entidades lo suficientemente competentes que tuvieran bajo su cargo la resolución de este tipo de controversias. Sin embargo, dos hechos importantes (Cerro Quilish y Majaz) suscitados durante el 2004 obligaron al Estado a tomar otro tipo de acciones frente al conflicto. La Presidencia del Consejo de Ministros se sumó a las acciones de lucha, puesto que proyectó el “monitoreo de conflictos sociales, creándose la Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos (en adelante, UAEPC) con un enfoque que privilegió el mantener el orden público omitiendo una línea investigativa del conflicto y sus causas. Así, la respuesta estatal se caracterizó por no tener criterios comunes ni una normatividad general para los sectores”. (ACEVEDO, 2011)

Para lo que corresponde a este periodo de crisis social “la Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos Sociales) tuvo limitaciones para afrontar el proceso de descentralización por lo que se integró al Ceplan. En el 2006 la UAEPC se denominó la Unidad de Análisis de Conflictos (en adelante, UAC) como entidad responsable de detectar y anticiparse a los conflictos sociales en la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales, activa hasta el 2010”.

Este tipo de institución, según se aprecia del recuento de las actividades logró intervenir de manera puntual con una dirección enfocada en la solución de las situaciones que se comprenden como el origen de la coyuntura respecto de la

situación crítica, puesto que la cantidad de problemas sociales y sus protestas estaban en aumento.

Para lo que se experimentó a partir del año 2005, la actividad de los capitales que invirtieron en el país se ocupa en su gran mayoría de la extracción de recursos en escalas grandes, dándose en mayor cantidad en los espacios alejados del país considerado como la zona rural, sobre todo en el ande y la Amazonía. Ello promovió cierta cantidad de situaciones conflictivas a nivel social, lo cual se motivó en función a la intromisión de los extranjeros en sus territorios rechazando este tipo de acciones en los espacios que se supone son intangibles y corresponden a las comunidades campesinas y nativas según sea el caso.

A partir de la segunda mitad de la década del 2000 mediante la Defensoría del Pueblo, logró instituirse la “Unidad de Conflictos Sociales”, que luego se incorporaría a su nombre el cargo de Dirección de esta unidad, la misma que se ocupa de sugerir las estrategias para guiar la construcción de la institución y las que correspondían para procurar la solución de los conflictos que existieran coyunturalmente.

También se produjeron situaciones conflictivas en puntos específicos como son Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica, en las que se produjeron espacios de movilización como reclamo ante la intromisión de las empresas de extracción y la decisión que tomara el Estado frente a esta situación. En tal sentido el gobierno central se ocupó de generar espacio colectivo para lograr negociar con esta población a través del diálogo.

Para tales efectos durante el año 2009 se dio en Andahuaylas la primera “Mesa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos” que se entiende asumía la defensa de los derechos de los pobladores con un nivel de pobreza extremo, que

orientaba la acción de la ciudadanía a fin de conseguir la atención de parte del aparato estatal mostrando sus requerimientos sociales relacionadas con el tema de la situación afectada de las comunidades campesinas y nativas en estos espacios.

“Es en este contexto de conflictividad post Bagua que recién en el año 2009 la Defensoría del Pueblo creó la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad que tuvo como principal función la dirección y monitoreo de los conflictos sociales a nivel nacional. Para ello, se debía crear un nivel de coordinación entre las instancias estatales, a fin de generar respuestas oportunas ante los conflictos”. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2012)

Este tipo de acción ha logrado en su momento el reconocimiento de ciertas situaciones conflictivas sobre todo en lo referente a los intereses comunitarios, con lo cual se logró monitorear la existencia de estos e identificarlos en función a su origen y la necesidad que debiera ser solventada por el Estado; que incluso alcanzaba a situaciones que se producían entre las mismas comunidades en función a lo que corresponde a su espacio territorial.

En lo que corresponde al inicio de la segunda década del 2000, la Presidencia del Consejo de Ministros se ocupó de la creación de una entidad de carácter especial que se ocupara del conflictos suscitado en el Perú respecto a la situación de los recursos y la propiedad de las comunidades campesinas denominada “Oficina de gestión de Conflictos Sociales- OGCS”, que realizó actividades destinadas a fines de concordia puesto que se apoyó en lo que se conoce como la estrategia de Cultura de Paz mediante el uso de las fortalezas y capacidad nacional para lograr prevenir y manejar de manera constructiva el conflicto que se pudiera generar a nivel interno sobre el tema comunal.

Esta actividad no resultó muy eficiente en tanto que las acciones que se tomaron sólo se enfocaron en el reconocimiento de la existencia de los problemas sociales, ante lo cual se identificaron los de condición más urgente y por ello mismo se enfocaron las fuerzas de sus potestades para la solución de este tipo de problemas, mas no se realizó el análisis adecuado para el reconocimiento del origen del problema y poder lograr de este modo tomar acciones estratégicas que permitieran lograr la prevención.

Sobre esta realidad se puede apreciar el comentario siguiente: “(...) la falta de regulación de parte del Estado generó una brecha entre la sociedad y el mercado; por lo que las reformas en descentralización estatal ayudarían al recorte de dichas brechas. Sin embargo, esta salida no fue del todo satisfactoria, ya que en algunos casos las acciones tardías o, la falta de atención generalizada, de parte de los gobiernos regionales y locales, hacían que se pierda credibilidad ante la ciudadanía y, por ende, hubiese un pliego de demandas insatisfechas”. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2012)

Con respecto a esta situación se puede indicar que el problema fue agravado en razón de la falta de titularidad de los propietarios de estas zonas afectadas y sobre todo en lo que corresponde a la propiedad de la Comunidad Campesina como institución, panorama en el cual se verificaba una situación creciente del interés particular por la extracción de los recursos naturales, produciéndose el descontento de la sociedad en general, puesto que afectan directamente la integridad del territorio de las comunidades haciendo un efecto de perjuicio sobre su propia naturaleza, esto es el sentido de su existencia.

La situación se trasladó al ámbito político en tanto que durante el 2011 en plena campaña electoral se adoptó por parte de Ollanta Humala quien candidateaba por

el máximo escaño del gobierno, una política de promesa para lograr la titulación de las propiedad de la comunidad campesina, además de la necesidad de hacer una evaluación concienzuda de los proyectos aprobados por el gobierno mediante las concesiones mineras sobre todo en los espacios donde las poblaciones menos favorecidas estuvieran siendo afectadas.

La finalidad de crear una entidad técnica que tenga la especialidad suficiente para poder establecerse como el encargado de la resolución de este tipo de situaciones conflictivas, por lo mismo que se propone orientar el proceso bajo la mecánica de diálogos que permitan coordinar con diferentes participantes de carácter social como por ejemplo la sociedad civil así como cierta institución de carácter público y otras de tipo privado. Se procuró con ello dialogar con la finalidad de abordar la problemática bajo una perspectiva con diferentes puntos de vista de carácter social, político y hasta cultural que se ven inmersas como consecuencia de este tipo de crisis.

Entre otro tipo de acciones el Estado en sus medidas “promulgó en julio del 2014 la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, cuyo Título III estableció un procedimiento especial de saneamiento de tierras sin precisar sobre la titulación de comunidades campesinas”.

Luego como parte de las políticas públicas estatales “en octubre del 2015 el Ejecutivo aprobó la Política Nacional para la Transversalización del enfoque intercultural, mediante Decreto Supremo 003-2015-MC”. Todo ello implicaba que la resolución de los conflictos tendría que ser en base a la conservación de elementos de este tipo, por lo mismo que la creación de las políticas públicas del estado debieran contemplarlas de manera regular y exacta.

Toda esta circunstancia política y efectos sociales que se desencadenaron en función a ello, se puede entender que se produjo en base a la acción o gestión estatal para conseguir afrontar esta realidad, entre lo cual se puede indicar que el año 1968 se considera un punto referencial para los derechos que les correspondían a estos intereses comunales, puesto que significó la presencia de un cambio agrario que reformó la estructura de este ámbito, creándose una múltiple cantidad de organismos que se proyectaron sobre las labores destinadas a reivindicar el derecho indigenista procurando cambiar el ejemplo de gestión.

Sin embargo, el Perú se encontraba inmerso en el marco del Convenio 107 de la OIT, convenio que se convierte en el primer instrumento internacional, que enuncia los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los Estados ratificantes.

Ahora que si bien sobre este tema se abrieron nuevos caminos, en el Convenio N° 107 se usaban términos condescendientes y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 se hace referencia a estas poblaciones como "menos avanzadas" y se preconiza un criterio asimilacionista, que finalmente avocaba a la pérdida de la esencia de las comunidades.

En este periodo se hubo creado en el ámbito peruano lo que se denominó “Plan Nacional de Integración de la Población Aborígen”; ante ello se tendría que cuestionar la comprensión de las comunidades campesinas así como el hecho de la potestad o facultad de poder acceder a propiedades de carácter comunal en dicha época.

Para el caso de esta situación mostrada, en lo que corresponde a las tierras comunales siempre han tenido esa suerte de ser apropiadas por terceros, es importante atender la idea de reconocimiento esto es el límite que permite adquirir

derecho sobre este tipo de propiedad. Este planteamiento resulta de suyo importante en tanto que la situación del reconocimiento de la propiedad de las comunidades campesinas se presume mas no se trata de una concepción legitimada por parte del propio Estado, puesto que el traslado de la concepción de comunidad se extrae de una cuestión previa a la existencia de la República, en tanto que se las asume como instituciones de corte social en función a los espacios que ocupan y solo existe este tipo de validación a nivel constitucional, pero no precisamente un enfoque directo sobre la propiedad como tal.

Previo a tal reconocimiento en la década de los 90 del siglo pasado, se advierte una posibilidad al momento de aperturar los mercados a nivel internacional, para lo cual se logró mecanizar la actividad estatal con el fin de titular las tierras. El hecho de que se promoviera esta condición respecto a las comunidades campesinas con la finalidad de promover su protección, genera la creación de derechos a estas entidades, dicha titularidad llamó poderosamente la atención de los capitales extranjeros con miras al aprovechamiento de esta condición y tomar a estas extensiones territoriales como el centro de su mira de inversión.

Sub Capítulo III

El carácter inalienable de la propiedad en las tierras comunales

6. La inalienabilidad de las tierras comunales y su ausencia en el artículo 89 de la Constitución.

Habiendo entendido la dimensión del derecho de propiedad como un elemento importante en el desarrollo de la vida como parte de un grupo social y su participación en la composición de la estructura que corresponde a las Comunidades Campesinas, se ha de concebir de una manera más precisa la importancia que toma cuando se trata de su protección estatal.

Vista desde la perspectiva del reconocimiento de las Comunidades Campesinas, ha de tenerse en cuenta que son colectividades que existen desde mucho tiempo atrás, que han servido de base para la creación de los pueblos mismos, con la única diferencia que su distanciamiento ha generado ese aislamiento que las ha hecho distintas por la conservación de su organización en base a sus costumbres de arraigo antiguo, lo que se conoce pues como el derecho consuetudinario.

Siendo así es menester comprender que los elementos que la componen, son su gente, sus costumbres y el territorio que está compuesto por las tierras bajo su dominio, esta última cualidad es la que siendo un elemento esencial requiere de una protección más intensa por parte del propio reconocimiento estatal, por lo mismo que al inicio del mismo se le otorgó la característica de inalienable, término que debe estudiarse con cautela.

7. La inalienabilidad

Resulta importante tomar la definición que resulta de la búsqueda en los índices de la Enciclopedia Omeba sobre el término Inalienabilidad, así tenemos el siguiente: “Lo que no se puede enajenar válidamente. Como los derechos naturales, y las cosas que están fuera del comercio”. (Omeba, 2018)

Definición que servirá en el discurrir de esta investigación para el entendimiento de lo que realmente significa la característica de la propiedad comunal, cuya ausencia en la configuración de la misma, a nivel constitucional, estamos intentando explicar; búsqueda que se centrará básicamente en la verificación de la vulneración del derecho que corresponde a los comuneros. (Mello Alvarenga, Tierras Indigenas en Brasil, 2015)

Desde el punto de vista internacional se tiene lo que se entendería como justificante del establecimiento de la característica de inalienabilidad, indicando lo siguiente: “A primera vista, pudiera parecer que limitar la posibilidad de realizar intercambios de determinados bienes va en contra de los objetivos de eficiencia. Sin embargo, un estudio más detenido nos muestra que hay casos, quizá numerosos, en los que esos objetivos de eficiencia pueden ser mejor servidos a través del establecimiento de ese tipo de limitaciones. Esto sucederá cuando un intercambio voluntario produzca efectos externos, es decir, cuando a resultas de un intercambio voluntario se produzcan costes a terceros.

(...) Los costes externos también pueden justificar el construir derechos como inalienables en los casos en que no hay manera objetiva de establecer institucionalmente un valor para esos costes sin caer en la arbitrariedad. Este problema de asignación de un valor monetario es característico de toda una categoría de costes externos, llamados “moralismos” (moralisms), que en la práctica nos lleva muchas veces a construir ciertos derechos como inalienables. (Calabresi & Melamed, 1972)

7.1. El tratamiento normativo de la propiedad territorial

Se puede verificar de la opinión de Aróstegui, cuando hace una descripción de la propiedad territorial a través del tiempo, que ha sido diferente, apreciándose: “El

reconocimiento, por parte del estado, del carácter culturalmente diferente de los grupos indígenas respecto al resto de la sociedad en los respectivos países, como resultado de los procesos de demarcación y adjudicación de territorios indígenas con diversos grados de control de sus habitantes.”(ARÓSTEGUI RODRÍGUEZ, 2011).

Para tal caso habrá de considerarse la posición constitucional, en el artículo 163° de la Carta Magna de 1979 se apreciaba la condición especial que tenían las tierras comunales puesto se consideraban inalienables “salvo ley fundada en el interés de la comunidad, y solicitada por la mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas”.

Esta condición no ha sido adoptada por la actual normativa constitucional puesto que su postura las traslada al ámbito de la personería jurídica dotándolas de autonomía a fin de que se organice la labor que desarrolla como comunidad, lo cual desde luego trae como consecuencia un efecto de disponibilidad sobre las tierras que forman parte de sus territorio, puesto que el sentido económico que ellas incorporan pueden ser manejados en función de su propio criterio, lo cual más allá de la protección se ha convertido en un riesgo latente para la integridad del sentido que le da ser comunidad campesina o nativa.

Las condiciones en las que se presenta la realidad extractiva de los recursos se propicia como una situación especial en tanto que se requiere de la condición permisiva de la población que se entiende es propietaria del espacio territorial de la comunidad en la que se ha de producir la labor de extracción. Esta situación se ha generado en tanto que se promulgó la “Ley N° 26570 (llamada Ley de Tierras) dejando la posibilidad de acceder a un procedimiento de servidumbre minera si no se llegaba a un acuerdo previo a la utilización del predio. Más adelante, el Decreto

Legislativo N° 1064 eliminó el acuerdo previo y el procedimiento de servidumbre minera; sin embargo, protestas sociales del año 2009 lograron derogarlo”.

En lo que se puede ver la revisión de la Ley de Tierras se entiende a las comunidades campesinas y nativas como un grupo organizado, esto es que tiene vigencia y prevalencia en la realidad, así pues entre lo principal es el reconocimiento de la capacidad de disponer de su territorio, por lo mismo que podía asumir cualquier tipo de modo de organizarse incluso como una empresa si así lo considerara prudente la asamblea, para lo cual no se exigía el cumplimiento de formas o condiciones, al punto de poder convertirse en sociedades anónimas.

En esta concepción se consideró prudente la regulación de sus actividades de manera estatutaria teniendo en cuenta la capacidad que se indicó anteriormente para disponer de su territorio para lo cual se requería que dicha decisión tendría que ser aprobada como un acuerdo por parte de la Asamblea General, con la salvedad que en el caso el territorio y dominio se encontrara en la parte del ande y territorios selváticos se requería de que la cantidad de opiniones aprobatorias sean mayores a diferencia de aquellas que se encontraban en el ámbito costero.

Este tipo de circunstancias se podría apreciar en la Carta Magna de 1979, puesto que aun considerando lo esencial representó el retroceder de la tutela que le corresponde al territorio comunal, en tanto a las garantías que permanecían como tal respecto a la condición inembargable, inalienable e imprescriptible, la garantía integral de la totalidad de sus propiedades no se conservó como tal.

De acuerdo al numeral 163 del ordenamiento constitucional se puede apreciar que: “Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros

calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero. Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad.”

Sub Capítulo IV

La Comunidad Campesina

8. Concepto de comunidad campesina

A partir de la idea de que es producto de una larga historia, son unidades que combinan funciones de regulación económica y social sobre sus integrantes, que comparten una propiedad y que interactúan como colectividad ante la sociedad mayor.

Para el Instituto de Defensa Legal *“Normalmente para definir si estamos ante una comunidad cultural indígena se emplean dos criterios: el reconocimiento “objetivo” por medio del idioma y el “subjetivo” mediante la autodefinición de cada quien. En ese texto lo indígena será considerado desde ambos puntos de vista.”* (INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL , 2007).

La vida de una comunidad va enraizada a su concepto mismo y como tal supone la existencia de: “a) un territorio comunal usufructuado familiar y comunalmente, b) un grupo de familias que se consideran sus miembros/propietarios, c) un cuerpo de dirigentes encargado de algunas funciones internas –de regulación social – y externas –de representación–, d) otras comunidades vecinas que interactúan entre sí y e) un Estado que la reconoce y le otorga legitimidad y que regula algunas normas y funciones” (DIEZ HURTADO, 2012). En este orden existe una sorprendente diversidad en el país, sea por razones históricas, geográficas y poblacionales.

Así por ejemplo, *“En el Cusco encontramos comunidades herederas de los ayllus y de las haciendas, mayormente quechua hablantes, en tensión permanente entre modernidad y tradición; en Ayacucho, comunidades pobres, que integran comités de autodefensa; en Cajamarca, comunidades/caseríos sostenidas por las rondas en espacios con débil tradición colectiva; en Huancayo, comunidades emprendedoras,*

con altos porcentajes de población emigrante e inmigrante, que comparten el espacio político con los distritos; en la costa de Piura, macro comunidades costeñas, asediadas por la urbanización y tentación constante hacia la parcelación; en la costa de Lima, comunidades de no agricultores, que especulan con terrenos eriazos de playas; en Puno circunlacustre, comunidades-parcialidades de pequeños propietarios, agricultores y ganaderos”. (DIEZ HURTADO, 2012). De igual manera se han presentado otros cambios en lo que corresponde a la condición comunal comprendida bajo la percepción de una región o en las subregiones.

En la actualidad se puede contabilizar hasta seis millares de este tipo de organizaciones comunales en el rubro campesino y supera el millar y medio en lo que se refiere a las de connotación nativa que tienen reconocimiento, se distribuyen de manera indistinta a través de regiones esto es que no se han distribuido de manera uniforme en todo el espacio territorial peruano, lo importante es que se les ha reconocido formalmente por parte de la estructura estatal.

9. Los derechos comunales

Este tipo de derechos tienen un origen relacionado con la característica de humanidad que le corresponde a cada uno de los seres que la componen, puesto que los comuneros al tener dicha condición adquieren la protección de parte del Estado en función a sus derechos y para el control de sus obligaciones inclusive.

Tal cual lo señalado, el común denominador del derecho en la construcción constitucional esta percepción se rige por la dignidad que le corresponde a cada persona que desde luego tiene un punto de partida más abstracto que son los derechos humanos, lo cual involucra que las acciones que se desarrollen en todo Estado constitucional y democrático de derechos, deban estar direccionadas al

reconocimiento de la condición humana y a esquematizar la estructura que permita la correcta ejecución de sus derechos.

“Los derechos humanos no se han de cumplir porque lo dispone la ley, de hecho, si una ley es contraria, jurídicamente no tendrá validez alguna... El fundamento último de obligatoriedad de los derechos humanos es, pues, el valor de fin en sí misma que tiene la persona humana, es decir, su dignidad humana”. (Gaceta Jurídica, Guía 6 , 2009).

10. Las tierras de las comunidades en el Código Civil y el Derecho de Propiedad sobre las mismas según la Constitución

En lo que corresponde al ordenamiento jurídico peruano para el ámbito civil específicamente se proyecta el reconocimiento de tales derechos comunales así pues se tiene que en el numeral 136 del código sustantivo civil señala: “Las tierras de las comunidades campesinas son inalienables, imprescriptibles e inembargables y se presume que son de propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad”.

Ello de acuerdo a la condición legislativa actual se puede entender como una incongruencia, en tanto que la condición de inalienabilidad de estas organizaciones ha desaparecido debido a que desde que se encuentra vigente la Ley 26505 ha posibilitado la disposición de las tierras de carácter comunal bajo una sola exigencia que conlleve a la disposición de este tipo de propiedad comunal, que es un acuerdo de la asamblea en función a las necesidades de la comunidad, votación que será no menor a los 2/3 de la totalidad de sus componentes comuneros.

Bajo esta posibilidad existe la apertura a la comercialización de la propiedad que le corresponde a la organización comunal, por lo que los terceros ajenos a este círculo pueden acceder al territorio que es de propiedad de estas comunidades. Teniendo en cuenta ello se pone en riesgo la integridad patrimonial y el sentido mismo de lo

que se entiende constituye una comunidad, esto es el dominio sobre sus tierras y la existencia de estas en su poder para poder establecer señalar que conservan la condición de organización autónoma.

Como se puede apreciar la influencia del ordenamiento civil en lo que corresponde a la propiedad tiene que ver con la posibilidad de poder disponer del bien en las acepciones que se puedan considerar y establece de hecho la norma, esto es la enajenación, gravar el bien o demás posibilidades jurídicas que se incorporan, pero lo más importante es reconocer el sentido amplio de la configuración de la comunidad que permita asumir el nivel de protección que deben tener sus extensiones territoriales a fin de promover su existencia a través de los tiempos.

Desde el punto de vista constitucional en lo que corresponde al derecho de propiedad se orienta sobre una condición de los dominios que se traslada hasta el derecho real que se desprende objetivamente de la propiedad, esto es “abarca a la pluralidad *in totum* de los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona y que son susceptibles de apreciación económica. De otro lado, el artículo 70 de la Constitución reconoce el bien común como una función social de la propiedad”.

Ello no debe entenderse solamente como la suposición de los derechos de propiedad que le corresponden a un determinado sujeto y que se generan explotando el bien para ser beneficiado de manera particular, más bien debe asumirse en el ámbito de su relación con la sociedad y la función que en ella desempeña.

Dadas las condiciones de comprensión de la función social de la propiedad, ello implica que las características que le sean otorgadas por el Estado en su función de control de este tipo de actividad, sean de corte social buscando el bien común, por

lo mismo que se concibe a la propiedad bajo la estructura tanto de un derecho así como la que se entiende como un deber, ello será lo que permite el mantenimiento del equilibrio social y que establece la función real de la propiedad, que traslada una protección individual hacia los intereses comunes de una colectividad.

Bajo esta perspectiva es que se puede indicar que la propiedad como derecho no tiene aquel carácter absoluto como se supone, sino que existen limitaciones inspiradas en los derechos de otros sujetos y de la propia comunidad social, así es como el Estado está obligado a ejercer su control en el desarrollo de las actividades comerciales dentro de la sociedad, para satisfacer este interés social que debe ser cubierto con la protección de la propiedad en todos estos aspectos.

Por lo mismo que para concebir adecuadamente esta armonía se precisa que: “a) El derecho a la propiedad individual con el ejercicio del mismo por los demás individuos; b) El derecho a la propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades individuales; c) El derecho a la propiedad individual con el orden público y el bien común”.

De acuerdo a la estructura jurídica civil del ordenamiento que conserva la postura de la ley 24656, indica que la propiedad territorial de este tipo de comunidades en su comprensión nativa o campesina, deben ser de carácter imprescriptible, pese a ello la construcción normativa constitucional en su numeral 89, se establece la figura jurídica de “Abandono” resultando ser la posibilidad de acceder a una adjudicación para quienes poseen estos espacios territoriales aún sin ser miembros de la comunidad ello para poder acceder a la propiedad.

11. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades nativas y campesinas

El máximo intérprete de la Constitución se ha pronunciado sobre esta situación respecto a la propiedad, indicado que se concibe como el poder de condición

jurídica sobre el cual se basa la capacidad de un sujeto para poder hacer uso, disfrute, disposición y reivindicación de sus bienes. En tal sentido este sujeto se considera propietario y puede ejecutar tales facultades de manera directa sobre el elemento que constituye su propiedad y recibir lo que produce, y fructifica, de igual modo decidir sobre lo que debe pasar con dichos productos que desde luego será en beneficio de su interés particular, sin desligarse de la condición de licitud y el beneficio comunitario, vale decir respetando los intereses sociales.

El reconocimiento civil de esta connotación de la propiedad lo concibe desde el punto de vista de los derechos reales, con una condición absoluta y de perpetuidad. “Así, es un derecho real por excelencia, porque establece una relación directa entre el titular y el bien, ejercitando el propietario sus atributos sin intervención de otra persona. Además, la propiedad es erga omnes, esto es, se ejercita contra todos, cualidad denominada oponibilidad. Es un derecho absoluto porque confiere al titular todas las facultades sobre el bien: usa, disfruta y dispone. Es exclusivo, porque descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo que el propietario lo autorice. Y es perpetuo, pues no se extingue por el solo uso” (STC 0005-2006- PI/TC).

En lo que se refiere al caso de las comunidades campesinas y nativas sobre la concepción del derecho de propiedad de la comuna, se debe tener en cuenta lo señalado por este ente interpretativo, así pues contempla: “que esta visión civilista de la propiedad debe ser recompuesta desde una mirada multicultural, esto es, tomando en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos indígenas”.

También es importante considerar la casuística que se desarrolla en la STC0022-2009-PI/TC, en el que se asumieron las posturas establecidas por CIDH, para el

caso de “*Yakye Axa vs Paraguay*”. Para este caso la Corte bajo mención hubo establecido el vínculo entre el pueblo indígena y lo que se comprende como el territorio tradicional además de todo el recurso que se comprende como parte de esta estructura geográfica, que incluso debe comprenderse a otros aspectos que se relacionan íntimamente con el aspecto cultural que forma parte de la costumbre de la propia comunidad.

Según lo apreciado en este caso se ha llegado a establecer “La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que el primero se encuentra dentro de una dimensión civil o patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los pueblos indígenas, que descenden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el territorio de la República del Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de conquista y colonización, mantienen sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o partes de ellas”. (EXP. N.º 01126-2011-HC/TC)

En tal sentido reconocer que esta población indígena tiene un esquema propio de costumbre, la manera de crear su propia estructura jurídica lo cual implica la ejecución de acciones en función a la costumbre, van más allá de la esfera de una organización contemplada en el ámbito civil. La proyección que plantea este tipo de grupo social está sustentada en una postura de corte político, que se cimienta en la libre determinación de los grupos de este tipo, asumiéndolo como un derecho inherente a la organización.

Capítulo III

Análisis de datos

1.- Tipo de Investigación.

De acuerdo a los tipos consignados por la metodología de la investigación y en función a que se trata de una investigación jurídica, en la presente se sigue el sendero de la investigación no experimental de carácter teórico, puesto que se hará uso del razonamiento jurídico para alcanzar un entendimiento de la realidad social y jurídica para conocer con exactitud los efectos del problema que se plantea, para ello se realizará una observación de los hechos para luego establecer inferencias que conlleven a un razonamiento general; siendo así sólo se analizará una circunstancia existente mas no se manipulará la realidad mediante experimentos que la alteren.

De otra parte, conforme a los tipos de investigación según el enfoque, esta se ha consignado como una de tipo cualitativa, toda vez que se remite el análisis a la verificación de las condiciones que se contemplan en la regla constitucional respecto al reconocimiento de las comunidades campesinas y los efectos que tiene sobre la garantía del derecho de propiedad de estas como entes institucionales.

2.- Método de investigación

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron los métodos que permitieron realizar el análisis jurídico, así se ha partido de la interpretación de las normas que incorpora el reconocimiento de las comunidades campesinas en el ordenamiento constitucional para lo cual se aplicó el método exegético lo cual ha permitido estudiar el contenido literal de dichas reglas a fin de reconocer su alcance y el ámbito de protección que el legislador constituyente intentó consolidar en su construcción.

De otro lado siguiendo la línea de interpretación se aplicó el método sistemático jurídico mediante el cual se ha podido establecer un análisis comparativo entre las reglas del reconocimiento constitucional de las comunidades campesinas y el resto de normas que incorpora el ordenamiento jurídico en pleno, como es el caso de las de orden registral y civil en lo que se refiere a la propiedad a fin de obtener el razonamiento respecto al nivel de su protección.

3.- Diseño de contrastación

Para lograr el nivel de contrastación de la hipótesis se diseñó un esquema que parte de la recopilación de los resultados obtenidos en base a la discusión de todos los elementos recopilados en la parte teórica de la tesis así como de la recopilación de los resultados al observar la realidad jurídica, así pues se tiene que estos permitieron lograr realizar la discusión sobre cada uno de los objetivos específicos mediante la cual se pudo arribar a una postura en función a cada uno de ellos y consolidar con dichos resultados una validación por cada una de las variables sintetizando las determinaciones para llegar a construir una determinación final que permitió razonar sobre el contraste que propicia frente a la hipótesis inicial.

4.- Población y muestra

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado como población a los casos en los que se han registrado la traslación de propiedad de parte de las comunidades campesinas mediante acuerdos de asamblea y se encuentran en el registro de propiedad correspondiente en la Zona Registral II de Chiclayo.

De acuerdo a la población señalada se ha tenido en consideración escoger la muestra en función a la teoría de la conveniencia para investigaciones no probabilísticas como esta, señalando un análisis estadístico que corresponde a la cantidad de transferencias de propiedad comunal durante los años 2015-2020 y la cantidad de

observaciones sobre el registro de transferencias de propiedad comunal durante el año 2015- 2020.

5.- Técnicas de recolección de datos

Para la recopilación de la información que se ha consignado en esta investigación se aplicó la técnica de análisis documental mediante la cual se ha revisado material bibliográfico y documentos que contienen información referente a la propiedad de las comunidades campesinas y la inalienabilidad comprendida como límite constitucional que permite su garantía.

Teniendo en cuenta que toda técnica requiere de un instrumento para la ejecución de su finalidad, por ello se ha utilizado la ficha bibliográfica como instrumento que permitió organizar adecuadamente la información en función a sus orígenes y contenidos según las fuentes y ordenarlas para su posterior utilización en la construcción de la investigación.

6.- Procesamiento y análisis e interpretación de datos

Para el proceso de la información se ha realizado mediante el uso de las guías de análisis mediante la cual se han establecido los criterios para ordenar la información discriminándola en razón de sus orígenes y relevancia respecto al tema, dando preferencia a documentos de textos publicados por editoriales registradas, y revistas indexadas cuyo origen generen confiabilidad de los contenidos.

En función a la sistematización de la información de relevancia jurídica se ha procedido a realizar el análisis de los datos ordenados y consolidar el resultado en función a los criterios adoptados de acuerdo a los indicadores que se orientan en razón de las variables de la investigación para obtener un resultado coherente con la estructura metodológica de la investigación.

7.- Resultados.

7.1. Del resultado estadístico

Con el fin de poder asumir una posición más clara respecto a la situación de las Comunidades Campesinas, hubo de recurrir a las oficinas del Registro Público de la ciudad de Chiclayo por ser la más cercana al centro de estudio, para lo cual se cursó la carta correspondiente con los documentos necesarios; tal pedido de acceso a la información pública, tuvo como respuesta una denegatoria de la información solicitada, la cual según se puede apreciar en la documentación incorporada como anexo de esta investigación (2), se trataba de:

- Cantidad de transferencias de propiedad comunal durante los años 2015-2020
- Cantidad de observaciones sobre el registro de transferencias de propiedad comunal durante el año 2015- 2020.

Siendo así, la respuesta denegatoria ha sido amparada en un oficio N° 487-2021/Z.R. N° II-UREG que toma como base el Art. 13 del T.U.O. de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala: “(...) la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido”.

Lo cual se traduce en un aspecto negativo de esta investigación, pero que muestra más bien otro aspecto positivo en tanto y en cuanto este tipo de respuesta y la configuración del esquema institucional lo que genera es un límite a la investigación, y puesto que tratándose de información que en

efecto sí se maneja a nivel de los Registros Públicos, no habría condición más clara de hermetismo en cuanto a los datos.

Por otro lado también se puede apreciar que la ausencia de un criterio de control que se supone debe manejarse institucionalmente sobre la actividad básica que le da el sentido a su existencia como Registro, es precisamente ello, la contabilización estadística de dicha actividad, la cual se basa en un sistema automatizado que permite no solo el control de la actividad por parte de la propia institución, sino que coadyuva a la evaluación de la realidad que afrontan las Comunidades Campesinas en el Perú respecto al desglose de su propiedad para ser trasladadas a terceros que es precisamente lo que se percibe en esta investigación como un problema que tiene como raíz la ausencia de la inalienabilidad en la estructura normativa que se ocupa de las Comunidades Campesinas y que trae como consecuencia el desarrollo legislativo que se orienta a generar libertades como el hecho de poder enajenar porciones importantes del territorio comunal en base a un acuerdo de asamblea.

Dicho de otro modo, esta condición limitante del acceso a la información y la despreocupada posición de la institución que se ocupa del registro de este tipo de traslados de la propiedad comunal a terceros no comuneros, sería uno de los factores que estarían comprometiendo más aún la ausencia de garantías que debe representarse normativamente sobre la inalienabilidad; puesto que no se podría tener una señal de alerta ante la posible variación del sentido comunal en función a la existencia de un territorio que forma parte de su esencia, ello debido a la falta de un registro estadístico adecuado. Todo esto supone una labor de control del propio Estado sobre este tipo de

actividades, por lo mismo sería importante la creación de una suerte de obligación o implementación de una oficina especializada en el control estadístico que permita la comunicación de estados de alarma ante el ente superior y así pueda llevarse en cadena hasta el conocimiento del Poder Ejecutivo para la generación de posibilidades de cambios en la política pública que orienta esta libertad de enajenación convenientemente justificada por acuerdos.

7.2.- Resultados de la validación de expertos

Conforme se ha planteado esta investigación desde la perspectiva no experimental, esto es que no se manejan los fenómenos de la realidad, sino que en función al derecho se aplica el análisis de la razón sobre ciertas posturas, estos planteamientos se han generado desde la proyección del tema relacionado con la propiedad que ostenta la Comunidad Campesina comprendida como institución, mas no como una cuestión particular respecto a tal derecho.

En ese sentido, se requiere para la adecuada determinación final de la investigación, que las posturas planteadas sobre la realidad descrita, deba ser validada adecuadamente por los expertos en la materia, es por ello que se escogió a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque en función a la regla estadística de la Conveniencia de la investigadora, toda vez que son estos especialistas a los que se tiene acceso de manera inmediata y contando con su nivel de opinión se ha podido corroborar el nivel de validez de dichas propuestas.

Tal corroboración se ha planteado a través de la construcción de un formulario en el cual se incorporan afirmaciones establecidas de acuerdo al sentido de las variables, esto ha permitido que sobre ellas se indiquen planteamientos

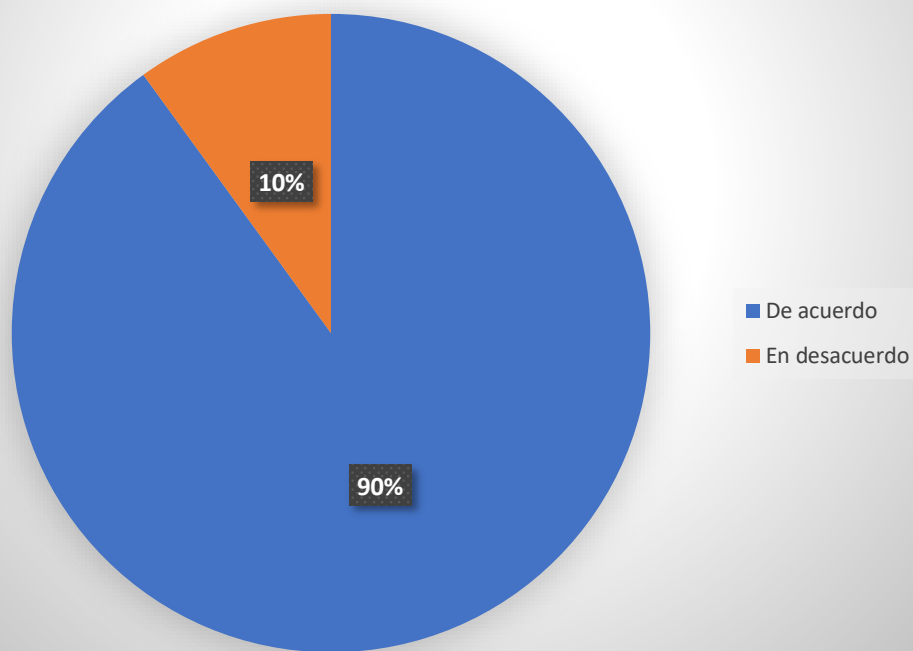
definitorios, críticos y de propuestas, las mismas que fueron aplicadas a los operadores de justicia a fin de reconocer el nivel de percepción y observar la validez de sus respuestas mediante los resultados que se plasman a continuación.

Tabla 1: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”.

1. El criterio de inalienable de un determinado objeto está marcado por su condición intrínseca, que para efectos de las tierras de las Comunidades Campesinas forma parte de su contenido y esencia, lo cual las aparta del comercio común, convirtiéndolas en inajenables	
Alternativas	Respuestas
De acuerdo	45
En desacuerdo	5
No opina	0
Total	50

Ilustración 1: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”.

1. El criterio de inalienable de un determinado objeto esta marcado por su condición intrínseca, que para efectos de las tierras de las Comunidades Campesinas forma parte de su contenido y esencia, lo cual las aparta del comercio común, convirtiéndolas en



OBSERVACIÓN: conforme se puede apreciar de la construcción del gráfico en función al resultado de la encuesta sobre la definición del concepto de inalienabilidad, resulta mayoritaria, toda vez que el 90 % de los encuestados están a favor de esta condición que resulta más una característica específica de la propia Comunidad Campesina, siendo así, el común del razonamiento de los expertos permite verificar que el sentido de esta institución debe ser protegido de una manera adecuada, atendiendo a dicha particularidad con el fin de lograr su permanencia en el tiempo.

Esta condición de permanencia adquiere la importancia necesaria en razón de que los elementos que la constituyen, forman parte del origen del derecho

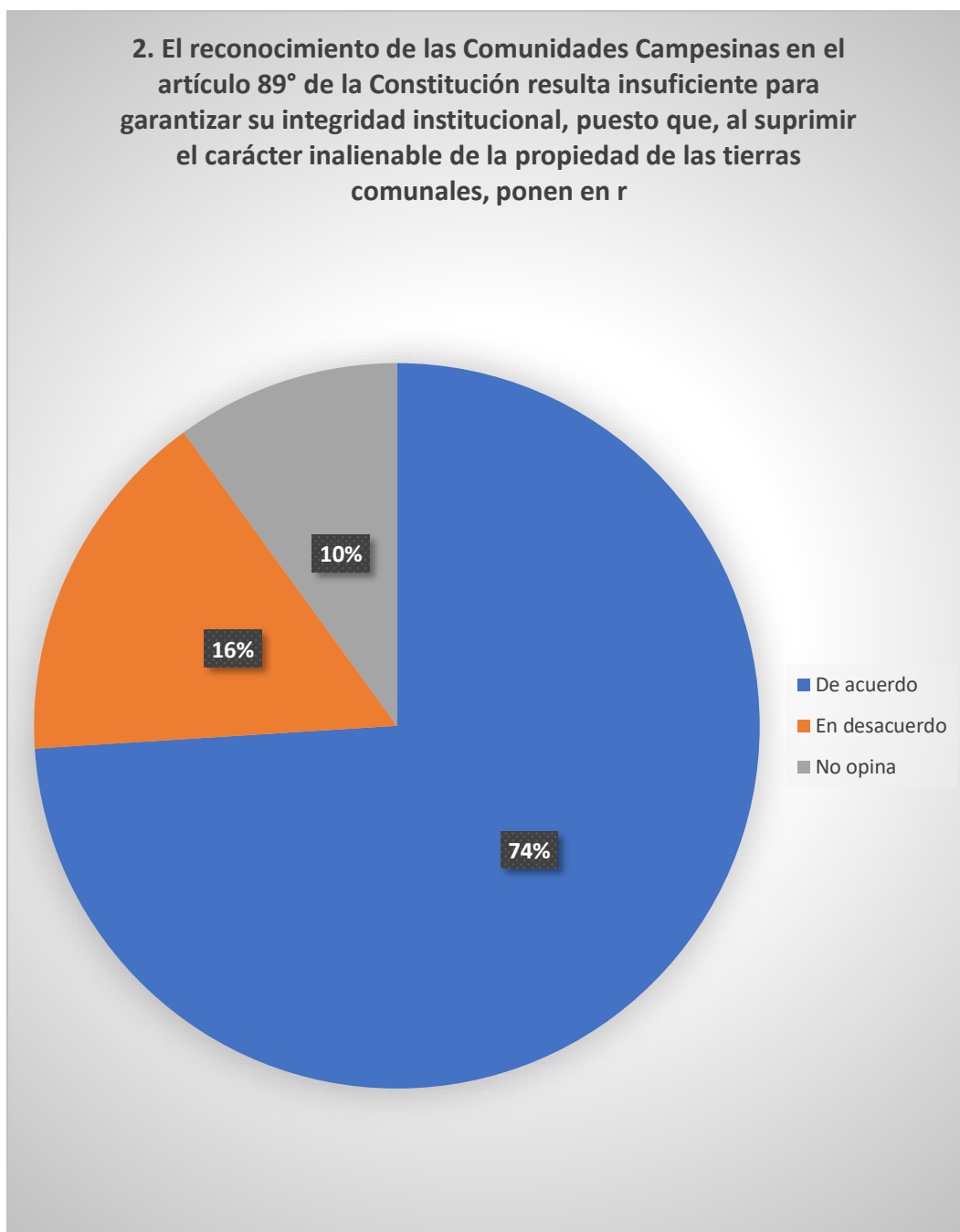
mismo, esto es que la situación consuetudinaria que se experimenta en este tipo de instituciones son la raíz más cercana que tenemos respecto al origen de la sociedad y el derecho. De tal manera que el descuido del aspecto de inalienabilidad traería como consecuencia la desnaturalización no solo de sus elementos para convertirlos en postura comercial, sino que tendería a su desaparición. Es en razón a ello que, la definición planteada por esta investigación resulta validada por los expertos en la materia de estudio.

Tabla 2: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”.

2. El reconocimiento de las Comunidades Campesinas en el artículo 89° de la Constitución resulta insuficiente para garantizar su integridad institucional, puesto que, al suprimir el carácter inalienable de la propiedad de las tierras comunales, ponen en riesgo su identidad.

Alternativas	Respuestas
De acuerdo	37
En desacuerdo	8
No opina	5
Total	50

Ilustración 2: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”.



OBSERVACIÓN: conforme se puede apreciar de la construcción del gráfico en función al resultado de la encuesta sobre que el reconocimiento de las Comunidades Campesinas en el artículo 89° de la Constitución resulta insuficiente para garantizar su integridad institucional, puesto que, al haberse suprimido el

carácter inalienable de la propiedad de las tierras comunales, se encuentra en riesgo su identidad 74% de los encuestados, opinan que esta supresión, genera un efecto negativo en la integridad institucional de las comunidades campesinas y que esta circunstancia además coloca en situación de riesgo a la conservación de la identidad de las comunidades campesinas.

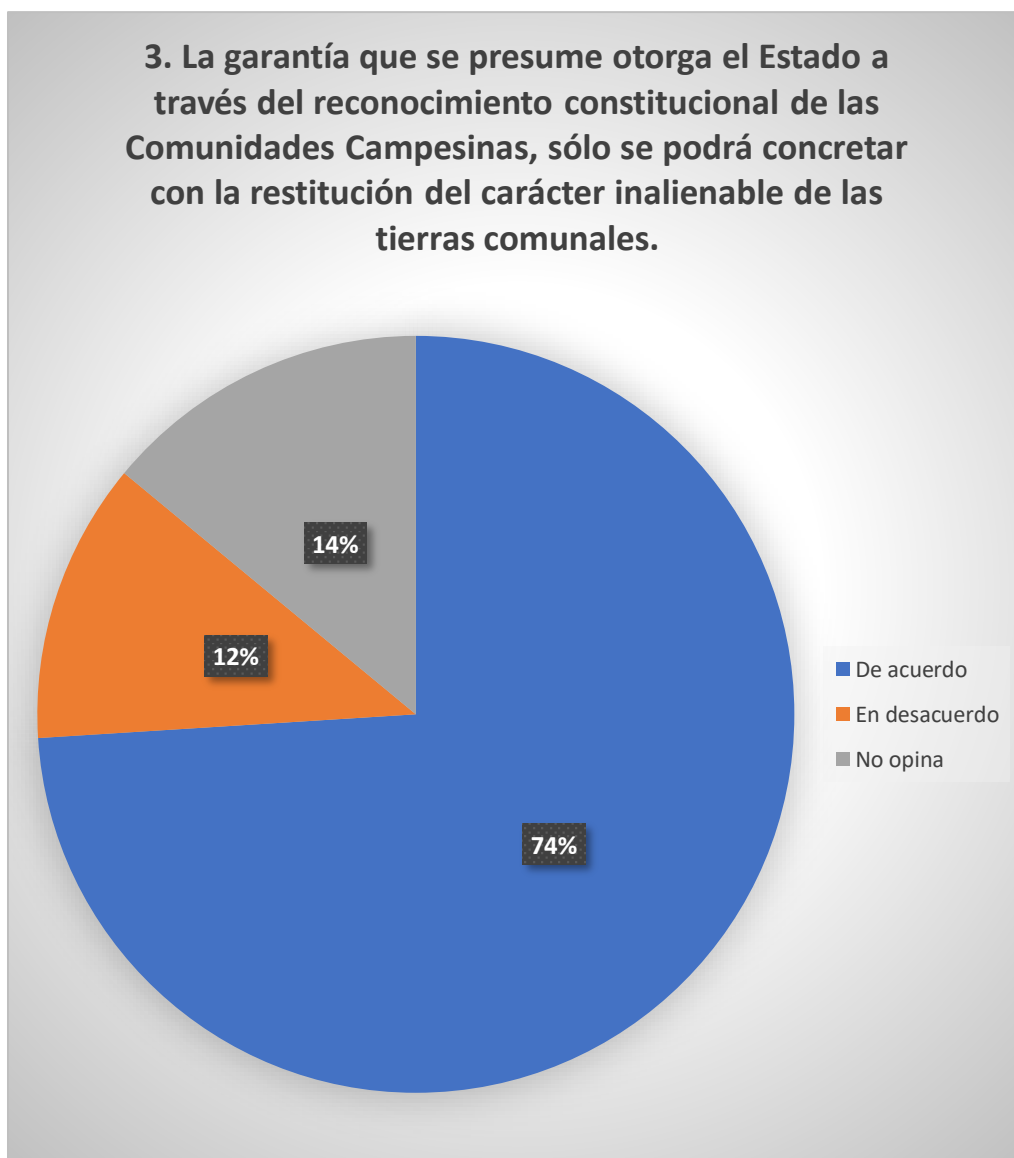
Es en razón a ello que, hipótesis planteada por esta investigación resulta validada por los expertos en la materia de estudio.

Tabla 3: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”.

3. La garantía que se presume otorga el Estado a través del reconocimiento constitucional de las Comunidades Campesinas, sólo se podrá concretar con la restitución del carácter inalienable de las tierras comunales.

Alternativas	Respuestas
De acuerdo	37
En desacuerdo	6
No opina	7
Total	50

Ilustración 3: 2 Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”.



OBSERVACIÓN: conforme se puede apreciar de la construcción del gráfico en función al resultado de la encuesta sobre si la garantía que se presume otorga el Estado a través del reconocimiento constitucional de las Comunidades Campesinas, sólo se podrá concretar con la restitución del carácter inalienable de las tierras comunales; el 74% de los encuestados, opinan que la garantía que debe ofrecer el Estado a las comunidades campesinas, solo se podrá materializar de

manera plena con la restitución del carácter inalienable de las tierras de las comunidades campesinas, pero desde el texto constitucional.

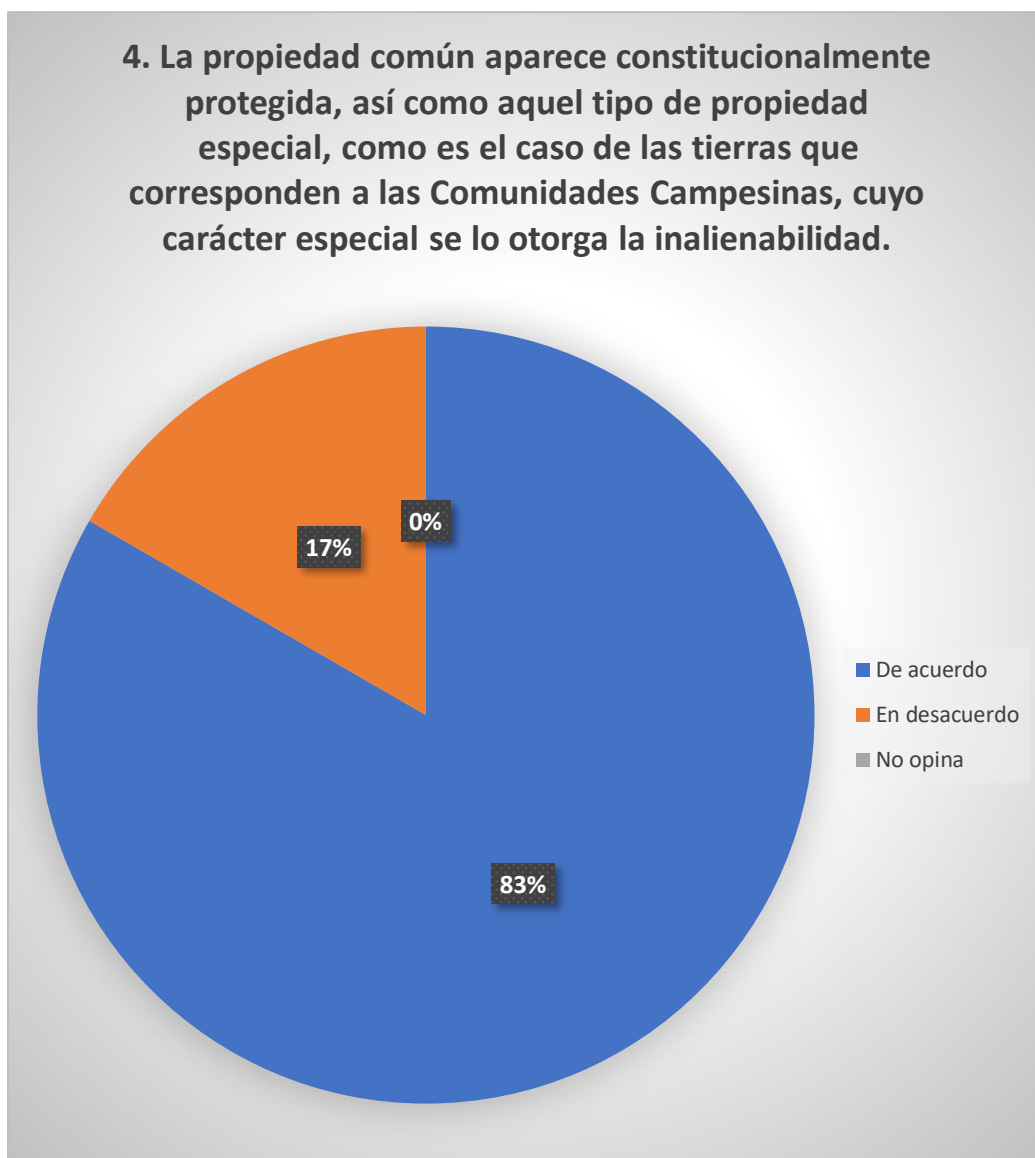
Es en razón a ello que, hipótesis planteada por esta investigación resulta validada por los expertos en la materia de estudio.

Tabla 4: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”.

4. La propiedad común aparece constitucionalmente protegida, así como aquel tipo de propiedad especial, como es el caso de las tierras que corresponden a las Comunidades Campesinas, cuyo carácter especial se lo otorga la inalienabilidad.

Alternativas	Respuestas
De acuerdo	35
En desacuerdo	7
No opina	8
Total	50

Ilustración 4: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”.



OBSERVACIÓN: conforme se puede apreciar de la construcción del gráfico en función al resultado de la encuesta sobre la premisa que el si la propiedad común aparece constitucionalmente protegida, así como aquel tipo de propiedad especial, como es el caso de las tierras que corresponden a las Comunidades Campesinas, cuyo carácter especial se lo otorga la inalienabilidad; el 83% de los encuestados, opinan que si bien la propiedad comunal recibe protección constitucional, en razón de su condición de propiedad especial; que sin embargo

esa condición especial se la otorga la inalienabilidad; en mérito a lo cual, esta debe ser restituida en el texto constitucional.

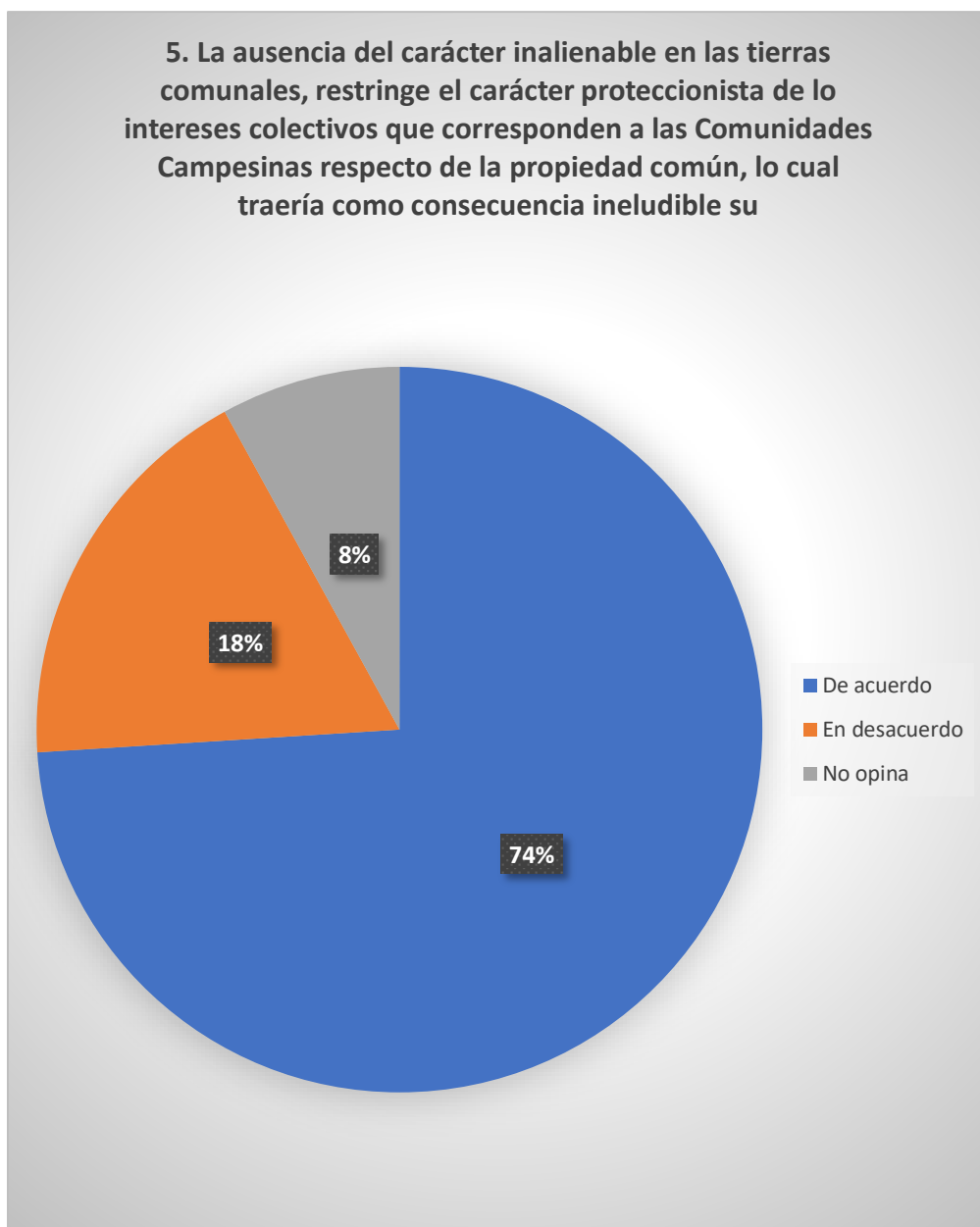
Es en razón a ello que, hipótesis planteada por esta investigación resulta validada por los expertos en la materia de estudio.

Tabla 5: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”.

5. La ausencia del carácter inalienable en las tierras comunales, restringe el carácter proteccionista de los intereses colectivos que corresponden a las Comunidades Campesinas respecto de la propiedad común, lo cual traería como consecuencia ineludible su indiscriminada enajenación.

Alternativas	Respuestas
De acuerdo	37
En desacuerdo	9
No opina	4
Total	50

Ilustración 5: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”.



OBSERVACIÓN: conforme se puede apreciar de la construcción del gráfico en función al resultado de la encuesta sobre la premisa que si la ausencia del carácter inalienable en las tierras comunales, restringe el carácter proteccionista de los intereses colectivos que corresponden a las Comunidades Campesinas respecto de la propiedad común, lo cual traería como consecuencia ineludible su indiscriminada enajenación; el 74% de los encuestados, opinan que en efecto la

ausencia de este carácter de inalienable de la propiedad comunal, ubica en una situación de desprotección a los intereses colectivos e las comunidades campesinas, respecto de su propiedad colectiva.

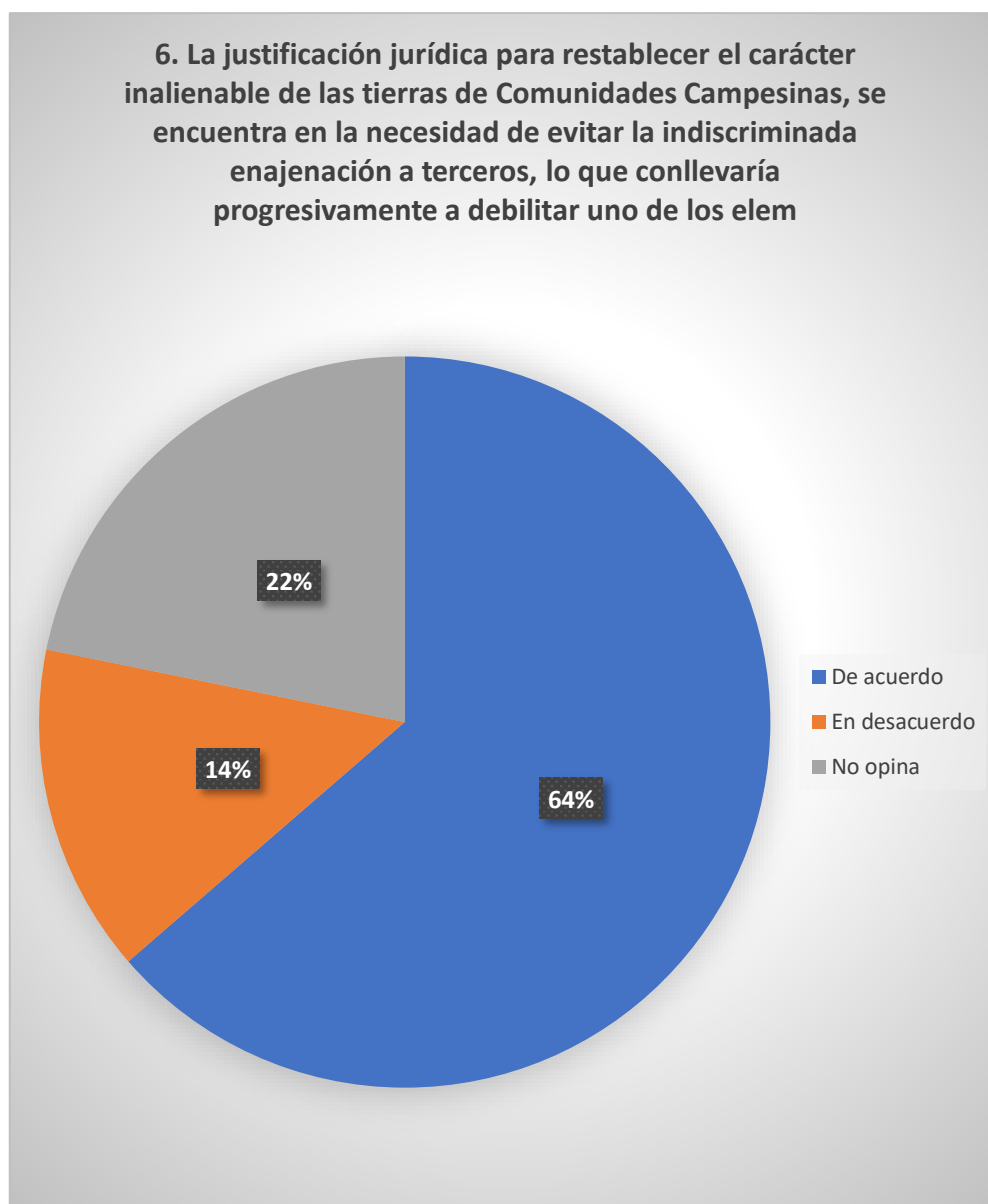
Es en razón a ello que, hipótesis planteada por esta investigación resulta validada por los expertos en la materia de estudio.

Tabla 6: “esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”.

6. La justificación jurídica para restablecer el carácter inalienable de las tierras de Comunidades Campesinas, se encuentra en la necesidad de evitar la indiscriminada enajenación a terceros, lo que conllevaría progresivamente a debilitar uno de los elementos más importantes de la naturaleza jurídica de estas instituciones, la propiedad comunal que forma parte de su identidad.

Alternativas	Respuestas
De acuerdo	35
En desacuerdo	8
No opina	7
Total	50

Ilustración 6: “Gráficos porcentuales sobre el esquema de la tabulación de los resultados obtenidos del formulario de encuesta aplicado a los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”.



OBSERVACIÓN: conforme se puede apreciar de la construcción del gráfico en función al resultado de la encuesta sobre la premisa que si la justificación jurídica para restablecer el carácter inalienable de las tierras de Comunidades Campesinas, se encuentra en la necesidad de evitar la indiscriminada enajenación a terceros, lo que conllevaría progresivamente a debilitar uno de los elementos más importantes de la naturaleza jurídica de estas instituciones, la propiedad comunal, la cual forma

parte de su identidad; el 64% de los encuestados, opinan que el restablecimiento del carácter inalienable de las tierras comunales, se justifica jurídicamente en la necesidad de salvaguardar un elemento importante en la constitución de la comunidades campesinas, como lo es sus tierras; pues su enajenación de manera indiscriminada afecta de manera directa a la conservación de su identidad cultural. Es en razón a ello que, hipótesis planteada por esta investigación resulta validada por los expertos en la materia de estudio.

Capítulo IV

Discusión

5.1. Discusión sobre el objetivo “Describir doctrinariamente el tratamiento del derecho a la propiedad respecto de las comunidades campesinas”

¿Cuál es el concepto más apropiado para definir la propiedad?

El derecho de la propiedad se encuentra regulado en la Constitución Política del Perú (1993), donde se le concede una categoría de derecho fundamental de la persona; o llamados también derechos de primera generación.

Por encontrarse regulado en el Artículo 2° inciso 16 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia”.

Lo que a primera impresión nos haría entender un concepto de la propiedad desde una óptica individualista.

Sin embargo, para poder contextualizar a la propiedad, debemos valorar los aspectos culturales de la sociedad; tomados en cuenta desde un fundamento filosófico, como los esbozados por Francisco Suarez , S.J. y John Locke, según lo encontramos en Baciero (2012); quienes en relación a la propiedad refieren:

“El derecho en sentido subjetivo para Suarez no es meramente una potestad o una facultad, sino una potestad moral. Lo que no implica solo tener un poder efectivo, sino que debe estar moralmente legitimado para poder ejercerlo. Siendo lo moral exclusivo del hombre, en la medida en que el hombre es su único dueño, gracias a la razón y puede tener por ello una relación de dominio sobre si y sobre sus facultades; es en esa medida que son suyas en el sentido riguroso de la propiedad, que no se pueden arrebatar sin cometer con él una injusticia”(pag. 391).

Cristi (2007) manifiesta que existen dos teorías sobre el origen de la propiedad: la teoría del trabajo por Locke y la teoría del consentimiento social

basada en la autora Rose, quien propone una tercera hipótesis, la del Common law, que permite su armonización a través de dos “principios definitorios de la posesión: la claridad en las señales de notificación posesoria y la recompensa del trabajo útil”; quien además se remite a la teoría filosófica, la cual sostiene:

“Tiene su origen en Cicerón quien comparó al mundo como un teatro, el cual es propiedad común de la humanidad; pero cuyos asientos son temporalmente propiedad de los individuos que los poseen. El problema que se presenta es el siguiente: ¿es el mundo originariamente propiedad de todos o de ninguno?” (Cristi 2007).

Desprendiéndose de esta posición dos concepciones de la propiedad: la individualista y la social. Ahora y como lo sostiene Rey (2006) si se tratara de tomar una posición debería ser el de la propiedad social por razones de mantener una convivencia pacífica, lo cual estaría acorde con nuestro ordenamiento jurídico y naturaleza social; estando ligado este derecho a la facultad que tiene toda persona para ser respetada en la propiedad que pueda obtener.

De lo señalado se podría deducir que el espíritu de la ley, haciendo referencia a la constitución, no solo garantiza la protección del titular de la propiedad, sino también a aquellos que carecen de ella.

Ahora desde la posición de la doctrina nacional en el derecho el concepto tradicional de la propiedad se basa en la enumeración de sus principales características que conforman su contenido. Verificándose que esta forma de definir la propiedad, se recoge del Código francés de 1804, el cual en su artículo 544 señala que “la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto con tal que no haga de ellos un uso prohibido por la ley o los reglamentos”,

y luego a todos los códigos latinos lo imitan, teniendo entre nosotros al Código Civil peruano según (Vásquez Ríos, 2003, p. 45)

Es así que nuestro Código Civil en su artículo 923° prescribe: la propiedad es: “El poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”.

Por lo que Arias Schreiber Pezet (2011,pag.190), expresa que el texto utilizado por el Código refleja el concepto de propiedad como un poder jurídico que permite la aplicación de un conjunto de atributos a favor del titular de dicho poder.

Evidenciándose la filosofía humanista del Código, pues la noción del poder jurídico del dueño sobre el bien constituye la reiteración del concepto de que los bienes, solo son instrumentos al servicio de la persona.

Pues no se trata de un poder ilimitado; por lo que la constitución hace referencia a sus limitaciones; pues si bien el poder es pleno, pero dentro de los límites en los que la ley los concede sobre la cosa, o si se quiere dentro de los límites máximos que la ley permite.

¿Se puede hablar de propiedad en el ámbito de las comunidades campesinas?

La Constitución Política del Perú en su artículo 88° establece: “*El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o **comunal** o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona*”.

Por lo que se sostiene, que el estado reconoce la “*propiedad comunal*” o colectiva de las comunidades campesinas sobre sus tierras ancestrales.

Asimismo, en su artículo 89° se reconoce que las comunidades son autónomas en el uso y libre disposición de sus tierras.

En consecuencia se puede sostener que en las comunidades campesinas no hay propiedad individual, sino propiedad colectiva; es en dicho sentido que en los registros públicos solo se genera una sola ficha de inscripción del derecho de propiedad de la comunidad; por lo que un comunero solo tiene posesión de la parcela familiar, no propiedad individual; por lo que la posesión individual solo le da derecho de usar y disfrutar de la parcela, así como el derecho a defenderla si alguien se la quiere quitar, pero de ninguna manera le da derecho a la disposición de estos territorios, es decir, no tiene derecho los comuneros individuales a vender, donar, regalar, alquilar, arrendar, dejar en herencia.

¿Qué diferencia existe entre la propiedad y la posesión?

La posesión es el dominio de físico o de hecho que se ejerce sobre una cosa; pero al igual que la propiedad reúnen en una misma persona la materialidad del objeto y su intención de ser su dueño, pero el propietario posee un título legal que lo convierte en poseedor legítimo.

Posesión y propiedad no son lo mismo, pero pueden ser complementarias; es decir se puede ostentar la posesión de una cosa, pero no ser el propietario de la misma, y viceversa. Un tema relevante en el Derecho Civil, es cuando una persona le asiste a la aplicación del derecho al ser privada de un derecho o bien. Un derecho o bien que poseía hasta el momento de ser despojado del mismo.

Propiedad se puede definir como el derecho o facultad de poseer algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. Es decir, eres el dueño de una cosa y tienes todos los derechos sobre ella, pudiendo ser el único propietario o junto con más personas; la Posesión se puede definir como el acto de tener una cosa con

intención de conservarla para sí o para otro; es decir usas una cosa como si fuera tuya, aunque otra persona sea el propietario.

¿Qué relación existe entre la propiedad y la posesión?

De acuerdo a los contenidos teóricos desarrollados respecto a la posesión, se la entiende como una condición específica que se ejecuta sobre determinados bienes, que para el caso de los bienes inmuebles, interesa señalar esta acción como aquella desencadenadora de la propiedad en tanto el reconocimiento jurídico que se le concede; dicho de otra manera, se entiende a la posesión como generadora de la propiedad.

Para el caso de las comunidades campesinas, siempre es importante aclarar el hecho de que la propiedad de manera individual no se ejerce al interior de la organización, puesto que al tratarse de un grupo de personas que ostentan la condición de comuneros, tienen derecho al uso y disfrute de la propiedad que le corresponde a toda la comunidad como institución; es decir, sólo son propietarios; de ello se advierte la relación que se pretende discutir en este espacio, puesto que el interés de reconocer constitucionalmente la propiedad de las comunidades obedece a un interés supra individual dentro de lo que corresponde a la comprensión de intereses comunes.

¿Cuál es el ámbito de protección de la propiedad a nivel constitucional respecto a las comunidades campesinas?

Atendiendo a la construcción del ordenamiento constitucional que opera en función a las garantías que contiene para asegurar la protección de los derechos indispensables a fin de que se consoliden en la ejecución del resto del ordenamiento jurídico, es importante señalar el ámbito de protección que ocupa cada una de estas garantías.

Para el caso de la propiedad que le corresponde a las Comunidades Campesinas el ámbito de protección de esta garantía opera en función a la finalidad de asegurar tanto la estructura y solidez de la existencia de este tipo de organizaciones, esto es que se pretende garantizar este elemento esencial de la composición comunal como lo es el patrimonio consolidado por la propiedad sobre el territorio que le corresponde.

Siendo así, interesa que la discusión que se desarrolle en los puntos correspondientes a la estructura constitucional sobre esta protección, deba verificarse la eficacia que genera aquella estructura normativa que se ocupa de asegurar que el patrimonio de la comunidad campesina se mantenga a través del tiempo a fin de asegurar la naturaleza jurídica que engloba a este tipo de institución.

TOMA DE POSTURA:

Ha de entenderse en base a la construcción constitucional en un Estado como el peruano, que existe un tratamiento diferenciado basado en el derecho a la igualdad ante la ley, esto es evitar el trato discriminatorio; siendo así, resultan importantes las clasificaciones que se incorporan en la normatividad a razón de ciertas diferencias, por lo mismo que la condición de diferenciación respecto a las comunidades campesinas, se traslada hacia el reconocimiento de la propiedad de este tipo de organización.

Dicha percepción constitucional, se justifica en función a la existencia de características especiales y específicas dada la naturaleza jurídica de las comunidades campesinas, sobre todo en el aspecto del mantenimiento de las condiciones naturales que generan el soporte de su existencia, como son las costumbres que se desarrollan en su interior de manera autónoma, además de la

propiedad que se ejerce de manera colectiva, cuyo derecho está amparado mediante el artículo 89° de la Constitución Política.

5.2. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el concepto de inalienabilidad de las tierras comunales y su ausencia en el artículo 89 de la Constitución”

¿Cuál es el concepto más adecuado para la inalienabilidad?

De acuerdo a lo señalado por la propia doctrina general, el concepto de inalienabilidad, se relaciona con el sentido de la esencia de los elementos, lo cual se traslada al ámbito jurídico a fin de asegurar esta condición de ciertos objetos, personas e incluso instituciones. Tal idea convoca a la estructura normativa con el fin de generar las condiciones especiales que permitan concretar dicha particularidad en una ejecución jurídica.

Siendo así se puede decir el que el concepto de inalienabilidad para el derecho debe estar orientado a una adecuada estructura normativa que conlleve a la determinación del ámbito de protección y por ende seguridad jurídica respecto a las características que se han de asegurar conserven su permanencia en el tiempo.

¿Cómo opera el concepto de inalienabilidad en la estructura de la naturaleza jurídica de las comunidades campesinas?

Tal cual se ha señalado en función al concepto de inalienabilidad, se puede establecer el hecho de que, para el caso de las Comunidades Campesinas, existen un sin número de condiciones particulares que deben ser protegidas de manera especial en base al ordenamiento jurídico; por ello es que se entiende como justificada la contemplación en la regla máxima del ordenamiento, esto es la Constitución Política, que se traslada sobre ello el interés de esta investigación a fin de verificar cuan adecuada es la contemplación de esta secuencia de protección.

Según lo indicado, serían muchos factores los que deben ser resguardados respecto a las características de las Comunidades Campesinas; sin embargo, el que

interesa a esta investigación se relaciona con un elemento trascendental que es el espacio territorial que ocupa en el ámbito nacional, el mismo que debe estar amparado bajo todas las características que se vinculan con la propiedad, salvo cierta condición que limita su traslado de manera libre, esto es que se aplique la condición de inalienabilidad, repercutirá sobre el aspecto de la enajenación de los territorios en los que se desarrolla dicha institución jurídica, ya que, de no existir un control de esta libertad, se permitiría la eliminación de uno de los factores más importantes que dan sentido a la esencia de la Comunidad Campesina.

¿Qué reconocimiento normativo constitucional se ha generado en función a la inalienabilidad?

En la actualidad no existe una condición específica para asegurar esta característica de las tierras comunales, a diferencia de la construcción normativa en la anterior constitución como es el caso del año 1979, en la que se apreciaba la especificación de dicha condición proteccionista.

Tal vez los intereses mercantilistas que dominan la actual normativa constitucional de 1993, orientada hacia el libre mercado o la libre competencia, sean los factores que estarían determinando la irrupción en esta necesidad de protección sobre el derecho de propiedad de las comunidades campesinas, al punto que esta ausencia ha generado ciertos efectos negativos sobre la esencia de la propia comunidad.

¿Cuáles son los efectos jurídicos que se observan de la ausencia de inalienabilidad en el artículo 89° de la Constitución Política?

Conforme se ha explicado líneas arriba, la ausencia normativa en mención, ha generado consecuencias legislativas como es el caso de la posibilidad de enajenación de las tierras comunales, que bajo el supuesto de una protección de

inalienabilidad, presentan cierta excepción. Tal posibilidad es un ataque directo a la condición de inalienable de la propiedad de las comunidades, puesto que aun cuando se tratara de acuerdos establecidos por Asambleas, no se garantiza que los intereses particulares incidan en las decisiones de esta envergadura.

Lo que se ha logrado como efecto negativo es el hecho de que las circunstancias generadas por la ausencia en el artículo 89° de la Constitución, respecto a la inalienabilidad ha propiciado la apertura de posibilidades de enajenación provocando lo antes explicado como la pérdida de la esencia misma de la comunidad respecto a su estructura territorial.

TOMA DE POSTURA:

La constitución Política se encuentra orientada a ser la norma jurídica vinculante por excelencia; por esta razón como norma suprema contiene o debe contener todos los elementos y derechos que son parte esencial del desarrollo social ya sea de manera particular o para el caso de las comunidades campesinas, de manera comunitaria.

Ahora que si bien la constitución en su artículo 89°, les concede a las comunidades campesinas, cierto reconocimiento, pues le otorga personalidad jurídica; lo que debería hacerlas titulares de derechos, se los restringe haciéndolos vulnerables y exponiéndolos a la pérdida de su identidad y de su cosmovisión; como institución natural y ancestral de cultura y espiritualidad. Tan es así que se ha perdido la percepción de la inalienabilidad de la propiedad que le corresponde a la Comunidad Campesina respecto a su espacio territorial, lo cual conlleva a la exposición negativa respecto a su propia existencia jurídica según lo antes explicado.

5.3. Discusión sobre el objetivo: “Verificar la realidad de la defensa de la propiedad comunal en la Comunidades Campesinas”

De acuerdo a todo lo estudiado en la investigación desarrollada se ha podido establecer que los lineamientos constitucionales que se refieren al tratamiento de las comunidades campesinas respecto a la protección de la propiedad comunal como una parte fundamental de su esencia, no son lo suficientemente garantistas.

Tal determinación ha surgido por la verificación de que el lineamiento de respaldo constitucional para las comunidades campesinas ha sido distorsionado en el traspaso de la norma de la Constitución de 1979 hacia la de 1993, lo cual se percibe por la ausencia del reconocimiento de la inalienabilidad en el artículo 89° de la Carta Magna. Tal situación se ha dicho que altera el principio de igualdad ante la ley en tanto que se debe aplicar diferenciaciones específicas a quienes les corresponde ello dadas sus condiciones especiales que permitan una distinción necesaria.

Tal es el caso de las comunidades campesinas, puesto que su condición estructural tiene por sentido esencial la composición a través del elemento patrimonio cultural y el territorial, además de sus integrantes que manejan la conservación de ambos; pero para ello sin duda alguna se requiere de la existencia de una regulación adecuada que permita establecer lineamientos específicos y adecuados que conlleven a una protección idónea de su existencia.

Luego según lo que se ha podido apreciar, esta legislación que emana del actual artículo 89° de la Constitución permite la enajenación de las tierras de la comunidad para que su propiedad pueda ser trasladada a terceros con el fundamento de un acuerdo comunal de asamblea, lo que se percibe definitivamente como una apertura a la corrupción entre las autoridades y los traficantes de tierras que estarían

apropiándose del patrimonio territorial que le corresponde por cuestión de naturaleza a estas instituciones, lo cual implica pues un riesgo.

De otro lado aunándose a la gravedad del riesgo está el hecho de la despreocupada posición de los Registros Públicos, que ante el requerimiento de la información estadística que sin duda alguna se cuenta en razón al manejo sistematizado del propio registro, niegan la posibilidad de acceder a dicha información amparándose en una regla que se interpreta a comodidad sin tener en consideración lo automatizado del sistema y la necesidad de tener un control sobre ello en cuanto a lo que se refiere a su propia labor de registro.

Esta situación se aprecia como un elemento más que coadyuva a la falta de control u observación de la realidad de la pérdida del patrimonio territorial de las comunidades campesinas en el Perú, puesto que no se tiene acceso a este tipo de datos que permitirían redirigir las políticas públicas orientadas a la protección de las comunidades en nuestro país.

Desde luego aún queda la validación de los expertos sobre el tema que se está discutiendo, como una herramienta de utilidad que sirve de apoyo a lo planteado en esta tesis, así se tiene la opinión de los operadores jurídicos que han respondido la encuesta construida en base a las variables que participan como ejes de la investigación, ante lo cual se ha podido apreciar un sentido de validación adecuada, en función tanto a las definiciones sugeridas, cuanto a las críticas y propuestas sugeridas. Siendo así se puede apreciar de los resultados que la postura de la investigación se comprende como validada.

TOMA DE POSTURA

Tal cual se ha podido apreciar en el desarrollo de toda la investigación existe un problema de protección respecto a la propiedad de las Comunidades Campesinas

en el Perú, lo cual se verifica en función a la ausencia del carácter de inalienabilidad de esta propiedad, que contempla el artículo 89° de la Constitución Política, dado que esto genera un sentido de libertad para la construcción de la legislación que opera sobre el manejo de las Comunidades en lo que se incluye la posibilidad de que la propiedad que pertenece de manera exclusiva a esta institución social y cultural en el Perú, pueda trasladarse a terceros en función a un acuerdo de la Asamblea, lo que se muestra como un factor de desprotección. Sumado a ello se encuentra la ausencia del manejo estadístico de parte de Registro Público sobre el traslado de la propiedad comunal a terceros, impidiendo la observación de la realidad que permita el manejo adecuado de la política pública sobre este tema en particular.

5.4. Validación de las variables

5.4.1. Respecto a la variable independiente: “La supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales”

En esta parte de la investigación habrá de tenerse en cuenta la forma en que participa esta primera variable y es que en la relación causal que identifica el problema, la variable independiente genera un concepto que permite reconocer el origen de la problemática, así pues se describe en base a que la supresión del concepto de inalienabilidad que estuvo contenido en la Constitución de 1979, respecto a las tierras comunales, estaría generando cierta desprotección de la propiedad que le corresponde a las comunidades campesinas sobre su territorio.

Partiendo de dicha idea es preciso señalar que la actual Constitución Política se encuentra orientada a ser la norma jurídica vinculante por excelencia; por esta razón como norma suprema contiene o debe contener todos los elementos y derechos que son parte esencial del desarrollo social ya sea de manera particular o para el caso de las comunidades campesinas, de manera comunitaria.

Ahora que si bien la constitución en su artículo 89°, les concede a las comunidades campesinas, cierto reconocimiento, pues le otorga personalidad jurídica; lo que debería hacerlas titulares de derechos, se los restringe haciéndolos vulnerables y exponiéndolos a la pérdida de su identidad y de su cosmovisión; como institución natural y ancestral de cultura y espiritualidad. Tan es así que se ha perdido la percepción de la inalienabilidad de la propiedad que le corresponde a la Comunidad Campesina respecto a su espacio territorial, lo cual conlleva a la exposición negativa respecto a su propia existencia jurídica. De acuerdo a todo lo señalado la variable independiente se valida bajo la siguiente afirmación:

La supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales altera la identidad de las comunidades campesinas afectando su cosmovisión cultural.

5.4.2. Respecto a la variable dependiente: “La propiedad en las comunidades campesinas”

Atendiendo al orden de las variables, la función de esta de carácter dependiente es la de identificar el efecto o elemento que se altera desde la perspectiva jurídica, vale decir que esta variable habrá de propiciar una determinación sobre la forma en que se viene afectando la propiedad en las comunidades campesinas, desde luego en relación con la afirmación de la variable anterior.

De acuerdo a ello, debe señalarse que la construcción constitucional en un Estado como el peruano, que existe un tratamiento diferenciado basado en el derecho a la igualdad ante la ley, esto es evitar el trato discriminatorio; siendo así, resultan importantes las clasificaciones que se incorporan en la normatividad a razón de ciertas diferencias, por lo mismo que la condición de diferenciación respecto a las comunidades campesinas, se traslada hacia el reconocimiento de la propiedad de este tipo de organización.

Dicha percepción constitucional, se justifica en función a la existencia de características especiales y específicas dada la naturaleza jurídica de las comunidades campesinas, sobre todo en el aspecto del mantenimiento de las condiciones naturales que generan el soporte de su existencia, como son las costumbres que se desarrollan en su interior de manera autónoma, además de la propiedad que se ejerce de manera colectiva, cuyo derecho está amparado mediante el artículo 89° de la Constitución Política.

Tal cual se ha podido apreciar en el desarrollo de toda la investigación existe un problema de protección respecto a la propiedad de las Comunidades Campesinas en el Perú, lo cual se verifica en función a la ausencia del carácter de inalienabilidad de esta propiedad, que contempla el artículo 89° de la Constitución Política, dado que esto genera un sentido de libertad para la construcción de la legislación que opera sobre el manejo de las Comunidades en lo que se incluye la posibilidad de que la propiedad que pertenece de manera exclusiva a esta institución social y cultural en el Perú, pueda trasladarse a terceros en función a un acuerdo de la Asamblea, lo que se muestra como un factor de desprotección. Sumado a ello se encuentra la ausencia del manejo estadístico de parte de Registro Público sobre el traslado de la propiedad comunal a terceros, impidiendo la observación de la realidad que permita el manejo adecuado de la política pública sobre este tema en particular. En función al análisis desarrollado se puede validar la variable dependiente mediante la siguiente determinación:

La propiedad en las comunidades campesinas carece de una protección adecuada en su tratamiento legislativo que genera libertad para el traslado de la propiedad institucional a terceros.

Conclusiones

Conclusión general

La supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales altera la identidad de las comunidades campesinas afectando su cosmovisión cultural; entonces, ello propicia que la propiedad en las comunidades campesinas carezca de una protección adecuada en su tratamiento legislativo lo que está generando libertad para el traslado de la propiedad institucional a terceros.

Conclusiones específicas

Primera:

Se ha llegado a concluir en función al derecho de propiedad de las Comunidades Campesinas que, en razón de que el ordenamiento Jurídico Peruano, reconoce al Derecho a la Igualdad, como un principio que tiene como esencia evitar el trato discriminatorio; más por diversas circunstancias, según el máximo intérprete de la Constitución; existen diversos factores, por los que si bien la igualdad ante la ley consiste, en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias; consecuentemente para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes, debe ser diferente. En este sentido dada las características especiales y específicas de la naturaleza jurídica de las comunidades campesinas, pues el soporte de su existencia, son las costumbres que se desarrollan en su interior de manera autónoma, debe la propiedad como elemento material para su subsistencia, estar amparado mediante el artículo 89 de la Constitución Política.

Segunda:

Se llega a la conclusión de que en base a la existencia de las políticas de titulación de tierras de las comunidades campesinas, se han generado conflictos sociales que hasta la fecha no han tenido una solución satisfactoria, en tanto que la

propiedad de las comunidades han sido afectadas y el sentimiento de la población comunera ve vulnerado su derecho a la propiedad; lo cual requiere de urgente atención en tanto que sus intereses van perdiendo protección con el paso del tiempo, sobre todo la integridad de su esencia que es la extensión territorial y la condición inalienable.

Tercera:

Se concluye de acuerdo a lo establecido en la constitución Política para el caso de las comunidades campesinas, específicamente en su artículo 89°, cierto reconocimiento, pues le otorga personalidad jurídica; lo que debería hacerlas titulares de derechos; sin embargo, se aprecia que existen libertades desarrolladas en la legislación, que las hace vulnerables y exponiéndolas a la pérdida de su identidad y de su cosmovisión; como institución natural y ancestral de cultura y espiritualidad. Tan es así que se ha perdido la percepción de la inalienabilidad de la propiedad que le corresponde a la Comunidad Campesina respecto a su espacio territorial, lo cual conlleva a la exposición negativa respecto a su propia existencia jurídica.

Cuarta:

Se ha llegado a establecer de acuerdo a la observación del concepto y realidad de las comunidades campesinas que definitivamente influye en el tratamiento de su propiedad en la Zona Registral II Chiclayo, dado que en esta entidad se traslada de manera objetiva la comprensión legislativa que se ha producido en función a los cambios en las políticas públicas que no se considera una estrategia adecuada, en tanto afecta la realidad de las comunidades y los intereses de los comuneros.

Quinta:

Finalmente se ha llegado a concluir que existe un problema sobre la protección respecto a la propiedad de las Comunidades Campesinas en el Perú, lo cual se verifica en función a la ausencia del carácter de inalienabilidad de esta propiedad, que contempla el artículo 89 de la Constitución Política, dado que esto genera un sentido de libertad para la construcción de la legislación que opera sobre el manejo de las Comunidades en lo que se incluye la posibilidad de que la propiedad que pertenece de manera exclusiva a esta institución social y cultural en el Perú, pueda trasladarse a terceros en función a un acuerdo de la Asamblea, lo que se muestra como un factor de desprotección. Sumado a ello se encuentra la ausencia del manejo estadístico de parte de Registro Público sobre el traslado de la propiedad comunal a terceros, impidiendo la observación de la realidad que permita el manejo adecuado de la política pública sobre este tema en particular.

Recomendaciones

Se recomienda restituir a nivel constitucional el carácter de inalienable de la propiedad comunal; es decir se debe introducir o restituir el mismo en el artículo el artículo 89 de la Constitución Política tal carácter; en atención a que se ha podido concluir que las Comunidades Campesinas, tienen características especiales, por lo que necesitan ser protegidas desde la máxima norma constitucional; es decir la Constitución Política del Perú; pues conforme se ha observado la protección legal que recibe de parte de la Ley de Comunidades Campesinas y del Código Civil, que si bien le sigue reconociendo esta característica de inalienable; no es suficiente para que se siga conservando y manteniendo en el tiempo esta relación de espiritualidad de tienen con la tierra; la misma que forma parte del hábitat en el que deben seguir desarrollando sus costumbres ancestrales y manteniendo ese vínculo especial que poseen con la tierra.

Referencias bibliográficas

- ACEVEDO. (2011). *El Estado y la gestión del conflicto*. Lima: Servicios educativos rurales .
- AÍN, G. (2014). *Institucionalidad para el diálogo y la prevención de conflictos*. Lima: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO .
- ALENCASTRE, A., & TORO, O. (1985). *Promoción campesina, regionalización y movimientos sociales*. Lima: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas/Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- ARCE. (2010). *Algunos apuntes sobre los movimientos y protestas sociales en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- ARÓSTEGUI RODRÍGUEZ, M. (2011). *La Problemática sobre el Derecho de Propiedad de las Poblaciones Previstas en el Convenio 169 de la OIT*. Lima: INDEPA.
- BURT, J.-M. (2011). *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Calabresi, G., & Melamed, A. D. (1972). *Propiedad, Responsabilidad, Inalienabilidad*. Massachusetts : Harvard.
- Corte Interamericana. (2001). *Caso Ivcher Brosntein*. San Jose.
- Declaración Universal de los Derecho Humanos. (1984). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Recuperado el 12 de Marzo de 2018
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. (2012). *Informe Defensorial N° 156: Violencia en los conflictos sociales*. Lima.

- DIEZ HURTADO, A. (2012). *Inversiones Privadas y Derechos Comunes*. Lima: Pontificia Universidad Católica Del Perú.
- ESTRADA PÉREZ, D. (1974). *La audiencia de pruebas en el fuero privativo agrario y en el decreto ley 20177*. Lima: Jurídicas.
- FIGALLO, G. (2007). *Origen, exclusión y reafirmación de las Comunidades Campesinas del Perú*. Lima: San Marcos.
- Gaceta Jurídica, Guía 6 . (2009). *Pautas para Interpretar la Constitución y los Derechos Fundamentales*. Lima: Gaceta Jurídica.
- GARAY, C., & TANAKA, M. (2009). *Las protestas en el Perú entre 1995 y el 2006*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos .
- Informativo Legal Agrario N° 21. (2010). *CEPES*.
- INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL . (2007). *Acceso a la justicia en el mundo rural* . Lima.
- Ley General de Comunidades Campesinas. (1992). *Ley N° 24656*. Lima: Congreso de la República del Perú.
- MARTÍNEZ, D., & ARMANDO, T. (1982). *El Agro Peruano 1970-1980: Avances y perspectivas*. Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación.
- MEJÍA, J. (1990). *La neo reforma agraria*. Lima: Cambio y Desarrollo.
- Mello Alvarenga, O. (2015). *Tierras Indígenas en Brasil*. Sao Paulo: Brasilia.
- Mello Alvarenga, O. (12 de Marzo de 2018). Obtenido de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=91>
- MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. (2004). *Para entender el TLC*. Lima.

MONGYLARDI, Cinthia, C. (2015). *Superposición de competencias derivada de la aplicación del Título III de la Ley 30230: COFOPRI*. Lima: INSTITUTO DEL BIEN COMÚN.

Omeba. (10 de 03 de 2018). *Enciclopedia Juridica*. Obtenido de <http://leyderecho.org/enciclopedia-juridica-omeba/>

Ortega Vasquez, N. (2014). *El Derecho de Propiedad Comunal Indigena en la Amazonia y su Regulacion en la Legislacion Peruana*. Lima.

PACHECO, I. (2009). *Las Comunidades Campesinas en la Región Huancavelica*. Lima: Servicios Educativos Rurales- ALLPA.

Peña Jumpa, A. (1998). *Justicia Comunal en los Andes del Perú: El caso de Calahuyo* (Primera ed.). Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de <https://books.google.com.pe/books?id=Kui5LPINft4C&pg=PA66&dq=comunidad+campesina+definici%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj3wYmjnpjpAhXDUt8KHeMsAa0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=comunidad%20campesina%20definici%C3%B3n&f=false>

RAMÍREZ MUÑOZ, D. (1974). *Procedimientos en el fuero privativo agrario del Perú*. Lima: Cavorr.

Robles Mendoza, R. (2002). *Legislación Peruana sobre Comunidades Campesinas* (Primera ed.). (R. Robles Mendoza, Ed.) Lima: Fondo Editorial UNMSM. Obtenido de <https://books.google.com.pe/books?id=KdipXcHoTcC&pg=PA62&dq=comunidad+campesina+constituci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiEhP6aq5jpAhWsc98KHUaJALEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=constituci%C3%B3n%201993&f=false>

ROBLES, R. (2002). *Robles, Román Legislación peruana sobre comunidades campesinas*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos .

SINAMOS. (1976). DECRETO LEY° 19352. Perú.

TANTALEÁN, J. (1986). *Rimanacuy 86: Diálogo con los campesinos*. Piura: INSTITUTO NACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN.

VALCÁRCEL, M. (1989). *Pobreza, desarrollo y violencia agraria en el Perú*. Lima: Debates en sociología, número 15.

Anexos

Anexo 1: Instrumento de Recolección de Datos:

A.- Encuesta:

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO ESCUELA DE POSGRADO



TESIS

“La propiedad en las Comunidades Campesinas y la inalienabilidad de las tierras comunales”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

I. Variable independiente: La supresión constitucional de la inalienabilidad de las tierras comunales.

1. El criterio de inalienable de un determinado objeto está marcado por su condición intrínseca, que para efectos de las tierras de las Comunidades Campesinas forma parte de su contenido y esencia, lo cual las aparta del comercio común, convirtiéndolas en inajenables.
 - a. De acuerdo

- b. En desacuerdo
 - c. No opina.
- 2. El reconocimiento de las Comunidades Campesinas en el artículo 89° de la Constitución resulta insuficiente para garantizar su integridad institucional, puesto que, al suprimir el carácter inalienable de la propiedad de las tierras comunales, ponen en riesgo su identidad.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
- 3. La garantía que se presume otorga el Estado a través del reconocimiento constitucional de las Comunidades Campesinas, sólo se podrá concretar con la restitución del carácter inalienable de las tierras comunales.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

II. Variable dependiente: La propiedad en las comunidades campesinas.

4. La propiedad común aparece constitucionalmente protegida, así como aquel tipo de propiedad especial, como es el caso de las tierras que corresponden a las Comunidades Campesinas, cuyo carácter especial se lo otorga la inalienabilidad.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

5. La ausencia del carácter inalienable en las tierras comunales, restringe el carácter proteccionista de los intereses colectivos que corresponden a las Comunidades Campesinas respecto de la propiedad común, lo cual traería como consecuencia ineludible su indiscriminada enajenación.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

6. La justificación jurídica para restablecer el carácter inalienable de las tierras de Comunidades Campesinas, se encuentra en la necesidad de evitar la indiscriminada enajenación a terceros, lo que conllevaría progresivamente a debilitar uno de los elementos más importantes de la naturaleza jurídica de estas instituciones, la propiedad comunal que forma parte de su identidad.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

B.- Solicitud y Respuesta sobre información a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

SEÑORITA:

PETRONILA ELIZABETH COLLAO PUICAN.

JEFE DE LA ZONA REGISTRAL N° II – SEDE CHICLAYO.

Por la presente, **Luz Esmerita Apolo Gómez**; con Documento Nacional de Identidad N° 41678050, con domicilio en Urbanización Andrés Araujo Morán – Edificios Héroes del Cenepa Block A11 – Departamento 301 – Tumbes, con Correo Electrónico luzgomez_29@hotmail.com y Celular N° 996398585; presento ante su despacho a fin de manifestarle:

Que mi persona tiene la condición de egresada de la Maestría de Derecho Constitucional y Gobernabilidad de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, encontrándome en consecuencia desarrollando la Tesis “La propiedad en las Comunidades Campesinas y la Inalienabilidad de las Tierras Comunales”.

En este sentido, acudo a su despacho, con la finalidad de que tenga a bien brindárseme la siguiente información sobre:

- La cantidad de transferencias de predios (tierras) de propiedad comunal realizados durante los años 2015 al 2020.
- La cantidad de las observaciones realizadas por su despacho – SUNARP - Zona Registral II - Sede Chiclayo, ante las peticiones de transferencias de propiedad comunal, durante los años 2015 al 2020.

Quedando a la espera, de que se me pueda facilitar con fines académicos la información que se me hace necesaria para poder continuar con el desarrollo de mi referida tesis.

Me despedido de usted, son otro particular.

Adjunto:

- Documento Nacional de Identidad.
- Resolución N° 1471-2019-EPG, mediante la cual se aprueba mi proyecto de tesis.

Atentamente.


LUZ ESMERITA APOLO GÓMEZ
D.N.I N° 41678050

2. Respuesta a la información solicitada a SUNARP Oficina II Chiclayo.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Chiclayo, 17 de marzo de 2021

CARTA N° 0185-2021/ZRN° II-UADM

Señora:
LUZ EMERITA APOLO GÓMEZ
luzgomez_29@hotmail.com

Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a información

Referencias: 1) Solicitud de acceso a la información pública.
2) Oficio N° 487-2021/Z.R.N° II-UREG.
3) Decreto Supremo N° 164-2020-PCM.
4) D. Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806.

Me dirijo a usted, para saludarla en representación de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo y en relación a lo solicitado mediante documento de la referencia 1), se le indica que su requerimiento no puede ser atendido pues la entidad, en consideración del contenido del documento de referencia 2).

La denegatoria del acceso, se formula en estricto cumplimiento del artículo 13° del Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente



Firmado digitalmente por CASTRO
HERNANDEZ Miguel Angel FAU
20207073580.ha10
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.03.2021 09:24:26 -05:00

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Zona Registral N° II – Sede Chiclayo: Av. José Balta N° 109 – Chiclayo / Teléfono: (074) 233381
www.sunarp.gob.pe

Canales anticorrupción: ☎ (01) 345 0063

✉ anticorrupcion@sunarp.gob.pe

📄 Buzón anticorrupción:
<https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/>



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia"

Chiclayo, 16 de marzo de 2021

OFICIO N° 487-2021/ZRN°II-UREG

Sr.

C.C.P.C. Miguel Castro Hernández

Jefe de la Unidad de Administración

Zona Registral N° II – Sede Chiclayo.

Presente. -

Asunto: Acceso a la Información

Ref.: Oficio N° 0106-2021/ZRN°II-UADM

Dirijo el presente a fin de saludarlo, y en atención al documento de la referencia, comunicarle lo siguiente:

Mediante solicitud de acceso a la información H.T. N° 602, se solicita:

- Cantidad de transferencias de predios (tierras) de propiedad comunal realizados durante los años 2015 al 2020.
- Cantidad de las observaciones realizadas por su despacho (SUNARP-Zona Registral N° II), ante las peticiones de transferencias de propiedad comunal, durante los años 2015 al 2020.

Al respecto, conforme a lo regulado en el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 13°, (...) **La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido.** En este caso la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.

Esta Ley no faculta que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. No califica en esta limitación el procesamiento de datos preexistentes de acuerdo con lo que establezcan las normas reglamentarias, que ello implique recolectar o generar nuevos datos."


En ese sentido, no es posible brindar la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi mayor estima y consideración.

Atentamente,


Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
 Oficina Principal Zona Registral N° II Sede Chiclayo: Av. José Balta N° 109 - 111 – Chiclayo / Teléfono: (074) 233381

Canales anticorrupción: ☎ (01) 345 0063

 **FIRMA DIGITAL**

www.sunarp.gob.pe
 Firmado digitalmente por:
 TINIPUCLLA CUYA DINO
 DNI: 7281940396
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 16/03/2021 10:02:03-0500

Buzón anticorrupción: <https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/>

 <p>SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>TRAMITE DOCUMENTARIO</p> <p>Hoja de Trámite</p>	<p>Número : 00 01-2021 - 001136</p>	
<p>SEDE CENTRAL Oficina SUNARP</p>	<p>Fecha Registro : 12/01/2021 14:55:26</p>		
<p>Remitente : LUZ ESMERITA APOLO GOMEZ</p> <p>Origen : USUARIO</p>			
<p>Documento: CARTA 01-2021-LEAG</p>		<p>N° de Folios : 3</p>	
<p>Asunto: Acudo a su despacho, con la finalidad de que tenga a bien brindárseme la siguiente información sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad de transferencias de predios (tierras) de propiedad comunal realizados durante los años 2015 al 2020. • La cantidad de las observaciones realizadas por su despacho – SUNARP - Zona Registral II - Sede Chiclayo, ante las peticiones de transferencias de propiedad comunal, durante los años 2015 al 2020. <p>- RESPONDER A: luzgomez_29@hotmail.com - 996398585</p>			
<p>Para Entregar a:</p>	<p>Indicaciones</p>	<p>Fecha</p>	<p>Firma</p>
<p>CHICLAYO - TRAMITE DOCUMENTARIO</p>		<p>14/01/2021 16:06:15</p>	
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>01.- Conocimiento</p> <p>02.- Coordinación con</p> <p>03.- Devolver al Remitente</p> <p>04.- Atención</p> <p>05.- Preparar Respuesta</p> <p>06.- Estudio e Informe</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>07.- Opinión</p> <p>08.- Solicitar Información</p> <p>09.- Urgente</p> <p>10.- Archivo</p> <p>11.- Liquidación</p> <p>12.- Proyectar Resolución</p> </div> </div>	<p>INDICACIONES</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>17.- Notificar al interesado</p> <p>18.- Para Trámite</p> <p>19.- Para firma</p> <p>20.- Otros</p> <p>21.- Distribuir a:</p> <p>22.- Con Copia a:</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>23.- Para Revisión</p> <p>24.- Seguimiento</p> <p>25.- Consolidar.</p> <p>26.- Difusión.</p> <p>27.- Agendar.</p> </div> </div>	
<p>OBSERVACIONES :</p>			
<p>Recepcionado por : (Espacio para sellos)</p>			

Fecha de Impresión : 14/01/2021 16:07:04